



UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

“EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES FRENTE A LA FACULTAD DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA”.

Monografía previa a la obtención del
Título de Abogado de los Tribunales de
Justicia de la República y Licenciado
en Ciencias Políticas y Sociales.

AUTOR:

José Andrés Jiménez Jiménez
C.I. 0106468390

DIRECTOR:

Dr. Marlon Tiberio Torres Rodas
C.I. 0301504643

CUENCA – ECUADOR
2018

RESUMEN

Los contribuyentes, al ser sujetos pasivos de la relación jurídico tributaria, están en la obligación de contribuir con el Estado; aporte que encuentra mayor eficacia en el derecho que tiene la administración tributaria a la información. Sin embargo, aquel derecho encuentra su límite en el conocido derecho a la intimidad que el contribuyente posee.

Para una mejor comprensión, empezaremos exponiendo los conceptos de los diferentes doctrinarios, tanto del derecho a la intimidad cuanto del derecho a la información; así como también de la forma en la que la legislación española y parte de la legislación latinoamericana, protegen dichos derechos. Además expondremos a cerca del amparo legal a la intimidad e información que nos ofrece el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Abordaremos el tema del derecho constitucional tributario con el objetivo de adquirir un conocimiento más amplio y concreto de los derechos fundamentales a estudiar; analizaremos también la figura jurídica constitucional del “habeas data”, como el recurso idóneo que el Ecuador ofrece a sus contribuyentes para la defensa de su derecho a la intimidad. Por otra parte, analizaremos detenidamente, según el Código Tributario, las facultades que la Administración Tributaria tiene para la obtención y registro de datos de sus contribuyentes.

Presentaremos las diversas teorías acerca de la prevalencia del derecho a la intimidad sobre el derecho a la información y viceversa, así como la teoría de la ponderación de derechos.

Finalmente realizaremos un análisis de la importancia de estos derechos para cada una de las partes.

Palabras claves: Derecho a la intimidad, Derecho a la información, contribuyente, administración tributaria, límites e importancia.

ABSTRACT

Taxpayers, being passive subjects of the legal tax relationship, are obliged to contribute to the Ecuadorian State regulations; contribution that finds a major effectiveness in the right that the tax administration has to receive information. However, that right finds its limitation in the known right to privacy that the taxpayer owns.

For a better understanding, we will begin exposing the concepts of different doctrinaires, both of the right to privacy and of the right to information; as well as of the way in which the Spanish legislation and part of the Latin American legislation, protect these rights. Besides, we will expose the legal protection of the privacy and information offered by Ecuadorian legal system.

We will focus on the issue of the constitutional tax law with the purpose of acquiring a broader and concrete knowledge of the fundamental rights to study; will also analyze the constitutional legal figure of “habeas data”, as the ideal resource that Ecuador offers its contributors for defenders their right to privacy. On the other hand, we will analyze carefully, according to the Tax Code, the capacity that the Tax Administration has for obtaining and registering their taxpayers data.

We will present the different theories about the prevalence of the right to privacy on the right to information and vice versa, as well as the theory of the weighting of rights.

Finally, we will analyze the importance of these rights for each of the parts.

Key words: Right to privacy, Right to information, taxpayers, tax administration, limits and importance.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN.....	2
ABSTRACT	3
ÍNDICE DE CONTENIDOS	4
CLÁUSULA DE LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL.....	6
CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	6
DEDICATORIA	8
AGRADECIMIENTO	9
INTRODUCCION.....	10
CAPITULO I: DERECHO DE LOS CONTRIBUYENTES Y LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	12
1.1 DERECHO A LA INTIMIDAD. Concepto.....	13
1.2 DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL DERECHO COMPARADO.....	15
1.2.1 ESPAÑA.	16
1.2.2 REPUBLICA DE ARGENTINA.	19
1.2.3 MEXICO.....	22
1.2.4 PARAGUAY.....	24
1.2.5 BOLIVIA.....	27
1.2.6 ESPAÑA.	33
CAPITULO II: EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA INFORMACION, EN LA CONSTITUCION Y EL DERECHO TRIBUTARIO.....	48
2.1 EL DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO.	48
2.2 EL HABEAS DATA COMO MEDIO DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA INTIMIDAD DEL CONTRIBUYENTE.....	52
2.3 FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.....	59
CAPITULO III: CONFLICTO ENTRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA INFORMACION.	65



UNIVERSIDAD DE CUENCA

3.1 TEORÍA QUE DA PRIMACÍA AL DERECHO A LA INTIMIDAD.....	66
3.2 TEORÍA QUE DA PRIMACÍA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN.....	68
3.3 TEORÍA SOBRE LA PONDERACIÓN DE DERECHOS.	69
3.4 EL DERECHO A LA INTIMIDAD FRENTE AL DERECHO A LA INFORMACIÓN.	71
3.5 IMPORTANCIA DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y DE INFORMACIÓN EN EL DERECHO TRIBUTARIO.....	73
CONCLUSIONES	81
RECOMENDACIONES.....	82
BIBLIOGRAFÍA.....	83



UNIVERSIDAD DE CUENCA

CLÁUSULA DE LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL



Universidad de Cuenca

Cláusula de Licencia y Autorización para Publicación en el Repositorio Institucional

José Andrés Jiménez Jiménez , en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación "EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES FRENTE A LA FACULTAD DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA", de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el Repositorio Institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, Enero de 2018

José Andrés Jiménez Jiménez

C.I: 0106468390



UNIVERSIDAD DE CUENCA

CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL



Universidad de Cuenca
Cláusula de Propiedad Intelectual

José Andrés Jiménez Jiménez, autor del Trabajo de Titulación "EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES FRENTE A LA FACULTAD DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, Enero de 2018

José Andrés Jiménez Jiménez

C.I: 0106468390



UNIVERSIDAD DE CUENCA

DEDICATORIA

A mi madre incansable luchadora.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

AGRADECIMIENTO

A Dios por las bendiciones derramadas, a mi madre, esposa e hijos por el incondicional apoyo brindado. Al Doctor Marlon Tiberio Torres por sus consejos, guía y asesoramiento desprendido y generoso. A los docentes, de la Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho, por sus conocimientos compartidos en las aulas.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

INTRODUCCION

Desde sus orígenes hasta la actualidad una de las características primordiales que poseen tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la información es la adaptación necesaria e indispensable a la que deben acogerse, debido a los constantes avances tecnológicos, informáticos y en si el imparable crecimiento de la ciencia. Es por esto que el derecho en general y de manera especial el tributario no podía quedarse estático ante tal peculiaridad.

Dicho de esta manera el derecho a la información que posee la Administración tributaria, resulta ser la máxima, por tanto el componente más importante para una mejor y eficaz recaudación tributaria. Sin embargo se tiene que tomar en cuenta que el movimiento de la información, que realiza la administración de sus contribuyentes, posiona dichos datos en un sitio peligrosamente endeble, y es justamente ahí donde encuentra cabida el derecho personalísimo a la intimidad.

Entonces he ahí la importancia del tratamiento de los derechos a la intimidad e información que lo realizaremos respectivamente, ya que la forma del cómo se manejan aquellos derechos en la actualidad, influirá sin duda alguna en la realidad social, y si su regulación y tratamiento son los correctos, brindará un sistema óptimo de recaudación, una mayor confianza al ciudadano en general y por ende plena seguridad a sus contribuyentes.

Es por ello que creímos necesario realizar un repaso de los diferentes cuerpos normativos de algunos países de Latinoamérica y España, y averiguar de esta manera los distintos avances constitucionales y legales que estos países ofrecen en materia de derechos a la información como a la intimidad. Demostrando con eso las deficiencias y vacíos que nuestro país padece, de manera especial en la parte del derecho a la intimidad.

Profundizaremos nuestro tema analizando la forma en la que la ley y la constitución amparan, por un lado a la administración tributaria y por otro a sus contribuyentes.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Analizaremos las diversas soluciones, que nos brindan algunas de las teorías más relevantes, al posible conflicto que puede darse entre estos derechos, para finalmente concluir demostrando que ninguno de los derechos es más importante que el otro, sugiriendo que la manera más saludable de convivencia entre aquellos, sería cediendo espacio una al otro, tomando en cuenta las diferentes circunstancias en las que se encuentren. Pero todo apegado a la ley.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES FRENTE A LA FACULTAD DE INFORMACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

CAPITULO I: DERECHO DE LOS CONTRIBUYENTES Y LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

Entre otros, uno de los derechos más importantes que los contribuyentes poseen, es el derecho personalísimo a la intimidad.

La doctrina mayoritariamente concuerda en que los inicios teóricos del derecho a la privacidad empiezan con la elaboración de un artículo titulado “The right to privacy”, quien en su contenido lo define al derecho a la intimidad como "el derecho de ser dejado solo".

Este derecho corresponde al ámbito interno del ser humano, y tiene que ver con sus valores morales, religiosos, su personalidad, sus sentimientos, sus orientaciones ideológicas, sexuales, etc. Es decir constituye una zona estrictamente reservada, sin la existencia de intromisiones de ninguna clase.

Este derecho lo encontramos establecido en el artículo 12 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Con similar texto, lo menciona el artículo 11 del Pacto de San José de Costa Rica de 1984, mientras que en nuestra constitución lo encontramos en el art 66, N.- 20.

Simplificándolo, el derecho a la intimidad consiste en la defensa que los individuos tienen para mantener en reserva cierta información. Entonces los ciudadanos son los que deciden, que información mantenerla aislada de otros, y es el Estado mediante sus leyes el que se encarga de regular esta situación. Teniendo en nuestro país como método idóneo de defensa en caso de lesión, la figura jurídica del habeas data.

Por otro lado se podría decir que el derecho angular de la administración tributaria, es el derecho fundamental a la información.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Derecho catalogado como pilar del Estado de derecho; no puede haber vigencia del Estado de derecho sin derecho a la información, ya que a su vez garantiza la libertad de pensamiento.

Dentro de la administración tributaria el derecho a la información encuentra su fundamento en el deber constitucional de contribuir, esto debido a que el contribuyente está en la obligación de aportar con la información estrictamente de trascendencia tributaria, necesaria para una correcta y eficaz recaudación y desenvolvimiento tributario.

A continuación expondremos los distintos conceptos y aportes de las diferentes legislaciones foráneas en cuanto al tema.

1.1 DERECHO A LA INTIMIDAD. Concepto

Tiempo atrás quizá por la situación en la que se vivía, la intimidad no era calificada como un bien jurídico tan valioso y delicado a la vez. Pero de ahí hasta hoy debido a la complejidad de la vida moderna y el creciente progreso de la ciencia, la técnica, el vertiginoso avance de la informática, el desarrollo de la industria, el imparable crecimiento de la población, la incorporación abrumadora de medios masivos de comunicación, la intervención cada vez más fuerte del Estado, entre otros, han colaborado para que en tiempos modernos, la intimidad de los ciudadanos se vea en evidente peligro. Induciendo con aquello a fortalecerla y defenderla.

Luego de esta pequeña introducción, de lo primero que nos ocuparemos es de entender con precisión el significado de la palabra intimidad, para lo que necesitamos remitirnos a la parte etimológica de la misma.

En forma abreviada podemos decir que intimidad viene del latín, y más concreto del adverbio “intus”, que significa “dentro”, “interior”.

La intimidad se refiere a lo que es privado, íntimo de cada persona, que se ubica dentro de sí mismo sin exponer al público.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Más específicamente la **intimidad** es la zona inmaterial que el ser humano aparta a un minúsculo grupo de personas, que por lo general son su familia o amigos.

A continuación expondremos el concepto de diferentes autores:

Según la Real Academia de la Lengua Española intimidad: Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia.¹

José María Desantes, acoge el concepto que nos da el DRAE afirmando que: La intimidad es una zona espiritual del hombre, pero Desantes lo mejora exponiendo que esta zona es exclusivamente suya, que tan solo por la decisión del propio individuo puede ser revelada.²

Miguel Ángel Ekmekdjian³, nos dice que es: “la facultad que tiene cada persona de disponer de una esfera, ámbito: privativo o reducto infranqueable de libertad individual, el cual no puede ser invadido por terceros, ya sean particulares o el propio Estado, mediante cualquier tipo de intromisiones, las cuales pueden asumir diversos signos.”

Para Humberto Quiroga⁴: “El derecho a la intimidad es aquel por el cual todo individuo puede impedir que los aspectos privados de su vida sean conocidos por terceros o tomen estado público.”

Según la Corte Constitucional Colombiana⁵ la intimidad “implica la facultad de exigir de los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está

¹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 23ª edición, Madrid, 2014.

² DESANTES, José María, exposición en seminario, “El derecho a la intimidad y a la vida privada y los medios de comunicación social”, 1991, Chile.

³ EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Argentina, Ed. Depalma, 1993, p. 567.

⁴ QUIROGA LAVIE, Humberto; Los derechos humanos y su defensa ante la justicia, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Ed; Temis S.A, 1995.

⁵ Fallo de la Corte Constitucional Colombiana, sentencia c-540 de 12 de julio de 2012.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones externas.”

Con estos conceptos, notamos claramente que la gran mayoría de autores, a su estilo afirman que el titular de la información es el único que puede decidir si revelar o no la misma.

Cuestión que corrobora la misma Corte Constitucional Colombiana⁶ al decir de manera textual que: “Este derecho, el de poder exigir el adecuado manejo de la información que el individuo decide exhibir a los otros, es una derivación directa del derecho a la intimidad...”

Con estos antecedentes y gracias al aporte de mencionados doctrinarios podríamos decir que el derecho a la intimidad es; un derecho de la personalidad abstracta e íntima, que solo por decisión suya puede ser revelada, y que una vez declarada esta información, tanto las instituciones públicas como privadas están en la obligación de manipular adecuada y correctamente estos datos.

1.2 DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL DERECHO COMPARADO.

Se dice que desde el siglo XVIII, los derechos humanos y por ende el derecho a la intimidad inician su presencia. Ya en el siglo XIV se desarrollan a plenitud, incorporándose así a la normativa no solo internacional sino también constitucional y tomando fuerza como una prerrogativa propia para el ser humano.

En la actualidad se podría decir que el derecho a la intimidad ha ido cambiando de forma notable, debido al vertiginoso avance de la tecnología, misma que ha propiciado a mantener relaciones más cercanas en cuanto a la información personal de un ciudadano con sus semejantes; es decir que esta información ya no solo la comparte con sus familiares o más allegados sino que la va exteriorizando a su entorno de una forma paulatina.

⁶ Fallo de la Corte Constitucional Colombiana, sentencia T-522/ de 30 de octubre de 1997.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Este avance de la tecnología a demás ha favorecido para que las distintas instituciones controlen, almacenen y manejen la información de cada persona.

Es por ello que decimos que el estado ya no solo debe controlar el ingreso a nuestra vida o círculo privado, sino más bien debería buscar el método idóneo por el cual las personas tengamos acceso y sobre todo control de la información que manejan las instituciones.

Por tal motivo es de gran importancia analizar las distintas normas de protección del derecho a la intimidad que nos ofrecen algunos de los países como España en Europa y otros de Latinoamérica.

1.2.1 ESPAÑA.

CONSTITUCION ESPAÑOLA⁷:

De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 18:

N.-1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

N.- 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

De esta manera obliga al estado español a garantizar este derecho a sus ciudadanos. Obligación que no es solo porque manda la constitución sino además por la firma y ratificación del Convenio n.º 108 del Consejo de Europa, del 28 de Enero de 1981, “para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal”. Motivando con esto a la creación de nuevas leyes que resumidamente trataremos a continuación.

España además de tener bien regulada y garantizada en su constitución el derecho a la intimidad, tiene también una legislación específica, que afirma los derechos que garantiza la carta magna.

⁷ Ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.⁸

Objeto.

Art.-1: La presente ley orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

Consentimiento e información de los datos.

Artículo 5.- Derecho de información en la recogida de datos 1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco.

Artículo 6.- Consentimiento del afectado¹. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

Acción de Habeas Data.

La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal ampara esta acción en sus arts. 15 y 16 de la siguiente manera.

Artículo 15.- Derecho de acceso. N.-1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos.

N.-2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.

N.-3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes.

Artículo 16.- Derecho de rectificación y cancelación. N.-1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

N.-2. Serán rectificadas o canceladas, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos.

⁸ Vigente desde el 14 de Enero de 2000.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

N.-3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

N.-4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación.

N.-5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.

Órgano de control.

De igual modo en el título VI de esta ley, podemos encontrar un órgano sancionador, como es la agencia de protección de datos, que ha criterio de la misma agencia, está encargada de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, (habeas data o también llamados derechos de Arco). Respaldado su procedimiento y trámite por el respectivo Reglamento de Protección de Datos personales.

Régimen de sanciones.

En el título VII de la LOPD regulan el procedimiento sancionador, que en su artículo N.- 44 califica a las infracciones como leves, graves y muy graves, de igual forma El artículo N.- 45 considera los distintos tipos de sanciones imponibles, clasificadas de acuerdo a la gravedad, que oscilan, las infracciones leves desde 601,01 € hasta las infracciones muy graves de 601.012,10 €.

Sanciones penales.

Artículo 197.-1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones



UNIVERSIDAD DE CUENCA

o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

Sanciones civiles.

Además de lo expuesto la legislación española tiene la llamada ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen. La finalidad de esta ley es constatar, dentro del derecho civil, la lesión que puede sufrir el afectado y dar paso a la respectivas acciones de protección tales como: acción declarativa, acción de cesación y abstención, acción de reparación e indemnización por daños y perjuicios, esta última tal y como manda la ley nos dice que la indemnización se extenderá al daño moral, valorable según las circunstancias del caso y la gravedad de la lesión efectivamente producida.

1.2.2 REPUBLICA DE ARGENTINA.

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA.⁹

Nuevos derechos y garantías.- artículo 43: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Dicho artículo no menciona con exactitud los **derechos a proteger**, ya que solo menciona que la acción de amparo, o conocida por nosotros como Habeas Data, procederá en casos de falsedad o discriminación. Pero toda esta polémica que se podría crear queda despejada completamente, debido a la:

⁹ Actualizada a la reforma de Diciembre de 1994.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES¹⁰.

Objeto.

artículo 1: La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el **derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre.**

Consentimiento e información de los datos.

Artículo 5. N.-1: El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias. El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de datos. Excepto cuando la ley lo permita.

En cuanto a la información el artículo N.- 6. menciona que cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara.

Acción de Habeas Data.

La Ley de Protección de los Datos Personales en su artículo 16 dice:
1. Toda persona tiene derecho a que sean rectificadas, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos.

2. El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad.

3. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente, habilitará al interesado a promover sin más la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en la presente ley. Con esto llegamos a la conclusión de que dichos artículos dan la posibilidad de que el ejercicio de la acción de Habeas Data se lo realice mediante dos procesos uno administrativo o prejudicial y en caso de inobservancia o inconformidad le resta el proceso judicial.

Órgano de control.

Artículo N.-29: El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley.

¹⁰ Promulgada Parcialmente: Octubre 30 de 2000.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Régimen de sanciones.

lo encontramos en los artículos 31 y 32 de la LPDP, mismo que establece que el régimen de control podrá imponer sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos (\$ 1.000.-) a cien mil pesos (\$ 100.000.-), clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos.

Sanciones penales.

Finalmente dicha ley en cuanto a las sanciones penales su artículo 32 incorpora a los artículos 117 y 157 en el código penal argentino, referidas penas.

Artículo 117.- N.- 2°. La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales. 3°. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona. 4°. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena.

Artículo 157. - Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.

Artículo 157 bis. -Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que: N.-1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; N.-2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro, información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley. N.-3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales. Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años.

Sanciones civiles.

El flamante código civil y comercial argentino en su artículo 1716 protege de manera general a la intimidad de la siguiente forma.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código.¹¹

1.2.3 MEXICO.

CONSTITUCION POLITICA DE MEXICO:¹²

Artículo 6: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo 6 N.-1 inciso 2: La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, (LFPDPPP).¹³

Objeto.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

Información y consentimiento.

Artículo 8.-Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente Ley. El consentimiento será expreso cuando la voluntad se

¹¹ Vigente desde el 1 de agosto de 2015.

¹² Actualizada a la reforma del 24 de febrero de 2017.

¹³ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.

Artículo 9.-Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.

Artículo 15.-El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad.

Acción de habeas data o derechos de arco.

Artículo 28.-El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen. Y en caso de incumplimiento por parte del responsable, o inconformidad del titular de la acción.

Artículo 45.-El procedimiento se iniciará a instancia del titular de los datos o de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de esta Ley que se consideran vulnerados. La solicitud de protección de datos deberá presentarse ante el Instituto dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable.

Órgano de control.

El órgano de control es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, cuyo objetivo lo detalla el siguiente artículo.

Artículo 38.-El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida observancia de las disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de la misma; en particular aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos regulados por este ordenamiento.

Régimen de sanciones.

Según el artículo 64 de la ley la primera sanción es el **apercibimiento** para que el responsable lleve a cabo la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales.

Artículo 64.N.-2, 3 y 4: N.-2.-Multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos



UNIVERSIDAD DE CUENCA

previstos en las fracciones II a VII del artículo anterior; N.-3.-Multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las fracciones VIII a XVIII del artículo anterior, y N.-4.-En caso de que de manera reiterada persistan las infracciones citadas en los incisos anteriores, se impondrá una multa adicional que irá de 100 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Tratándose de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las sanciones podrán incrementarse hasta por dos veces, los montos establecidos.

Sanciones penales.

Artículo 67.-Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia.

Artículo 68.-Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos.

Artículo 69.-Tratándose de datos personales sensibles, las penas a que se refiere este Capítulo se duplicarán.

Sanciones civiles.

El código civil federal mexicano no establece con precisión los daños y perjuicios para el cometimiento de las infracciones al derecho a la intimidad; pero de una manera general manifiesta:

Artículo 1910.- El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que pruebe que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.¹⁴

1.2.4 PARAGUAY

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY¹⁵:

Artículo 33. - DEL DERECHO A LA INTIMIDAD. La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas.

¹⁴ Actualizada a la reforma de 28 de enero de 2010.

¹⁵ Promulgada el 20 de junio de 1992.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Artículo 135.- DEL HABEAS DATA Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos. Como podemos darnos cuenta el habeas data tiene un doble propósito. En primer lugar da la posibilidad de acceder a la información de sí mismo con el objetivo de constatar dicha información. También como segunda alternativa puede solicitar a la autoridad competente la actualización, la rectificación o la destrucción de los datos que lesionen los derechos del ofendido. Similar a las naciones antes tratadas, Paraguay también tiene una ley que regula informaciones de carácter privado.

LEY N. ° 1682, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE 28 DE DICIEMBRE DE 2000.¹⁶

Objeto.

Art. 1°.- Esta Ley tiene por objeto regular la recolección, almacenamiento, distribución, publicación, modificación, destrucción, duración y en general, el tratamiento de datos personales contenidos en archivos, registros, bancos de datos o cualquier otro medio técnico de tratamiento de datos públicos o privados destinados a dar informes, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares. No se aplicará esta Ley en ningún caso a las bases de datos ni a las fuentes de informaciones periodísticas ni a las libertades de emitir opinión y de informar.

Consentimiento e información.

Artículo 4°.- Se prohíbe dar a publicidad o difundir datos sensibles de personas que sean explícitamente individualizadas o individualizables. Art. 5°.- Los datos de personas físicas o jurídicas que revelen, describan o estimen su situación patrimonial, su solvencia económica o el cumplimiento de sus obligaciones comerciales y financieras, podrán ser publicados o difundidos solamente:

a) cuando esas personas hubiesen otorgado autorización expresa y por escrito para que se obtengan datos sobre el cumplimiento de sus obligaciones no reclamadas judicialmente; b) cuando se trate de informaciones o calificaciones que entidades estatales o privadas deban publicar o dar a conocer en cumplimiento de disposiciones legales específicas; y, c) cuando consten en las fuentes públicas de información". Artículo 6°.- Podrán ser publicados y difundidos: a) Los datos que consistan únicamente en nombre y apellido, documento de identidad, domicilio, edad, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, ocupación o profesión, lugar de trabajo y teléfono ocupacional; b) Cuando se trate de datos solicitados por el propio afectado; y, c) Cuando la información sea recabada en el ejercicio de sus funciones, por

¹⁶ modificada por la Ley n. ° 1969, el 2 de setiembre de 2002.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

magistrados judiciales, fiscales, comisiones parlamentarias o por otras autoridades legalmente facultadas para ese efecto.

Esta ley tiene una particularidad al decir que cualquier persona tiene derecho de almacenar y manejar información pero siempre y cuando sea para uso como menciona la misma ley estrictamente privado; así:

Art. 2°.- Toda persona tiene derecho a recolectar, almacenar y procesar datos personales para uso estrictamente privado. Artículo 3°.- Es lícita la recolección, almacenamiento, procesamiento y publicación de datos o características personales, que se realicen con fines científicos, estadísticos, de encuestas y sondeos de la opinión pública o de estudio de mercados, siempre que en las publicaciones no se individualicen las personas o entidades investigadas.

SANCIONES:

Art. 10.- Se aplicarán las sanciones en los siguientes casos: a) las personas físicas o jurídicas que publiquen o distribuyan información sobre la situación patrimonial, solvencia económica o cumplimiento de obligaciones comerciales y financieras en violación de las disposiciones de esta Ley serán sancionadas con multas que oscilarán, de acuerdo con las circunstancias del caso, entre cincuenta y cien jornales mínimos para actividades laborales diversas no especificadas, multas que se duplicarán, triplicarán, cuadruplicarán, y así sucesivamente por cada reincidencia del mismo afectado. b) las personas físicas o jurídicas que, pese a estar obligadas a rectificar o a suministrar información para que se rectifiquen datos de acuerdo con lo que dispone el Artículo 7°, no lo hagan o lo hagan fuera de los plazos allí establecidos, serán sancionadas con multas que, de acuerdo con las circunstancias del caso, oscilarán entre cincuenta y cien jornales mínimos para actividades laborales diversas no especificadas; multas que, en caso de reincidencia, serán aumentadas de acuerdo con la pauta establecida en el apartado a). C) si los reclamos extrajudiciales a los que se refiere el Artículo 8° no fueran atendidos sin razón o sin base legal, se aplicará a la entidad reacia al cumplimiento de sus obligaciones, una multa que, de acuerdo con las circunstancias del caso, oscilará entre cien y doscientos jornales mínimos para actividades laborales diversas no especificadas;"

Sanciones penales.

En cuanto a la parte penal, el código penal paraguayo¹⁷ dedica el capítulo VII a los hechos punibles contra el ámbito de vida y la intimidad de la persona; destinando de manera exclusiva al derecho a la intimidad con sus respectivas sanciones el siguiente artículo:

¹⁷ Actualizada, al 03 de octubre de 2011, por la Ley n° 4439/2011.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Artículo 143. Lesión de la intimidad de la persona. N.-1º El que, ante una multitud o mediante publicación en los términos del artículo 14, inciso 3º, expusiera la intimidad de otro, entendiéndose como tal la esfera personal íntima de su vida y especialmente su vida familiar o sexual o su estado de salud, será castigado con pena de multa⁴⁴⁶. N.-2º Cuando por su forma o contenido, la declaración no exceda los límites de una crítica racional, ella quedará exenta de pena. N.-3º Cuando la declaración, sopesando los intereses involucrados y el deber de comprobación que según las circunstancias incumba al autor, sea un medio adecuado para la persecución de legítimos intereses públicos o privados, ella quedará exenta de pena. N.-4º La prueba de la verdad de la declaración será admitida sólo cuando de ella dependiera la aplicación de los incisos 2º y 3º. N.- 5º.- La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima.

Sanciones civiles.

El código civil de manera general indica:

Art.1833.- El que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Si no mediare culpa, se debe igualmente indemnización en los casos previstos por la ley, directa o indirectamente.

1.2.5 BOLIVIA.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA:¹⁸

Sección I: Derechos civiles. Artículo 21. N.- 2: Las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.

Habeas data, conocida en Bolivia como Acción de protección de privacidad.

Artículo 130: Acción de protección de privacidad. Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad. La constitución boliviana al decir acción de protección de privacidad confunde con la intimidad, es decir no tiene el panorama claro de la diferencia que existe entre intimidad y privacidad, sin embargo con el desarrollo del artículo da a notar que se trata de la acción conocida por nosotros de habeas data, encargada de proteger la el derecho fundamental a la intimidad.

Sanciones penales.

El código penal boliviano manifiesta lo siguiente:

¹⁸ Ratificada el 25 de Enero de 2009 mediante Referéndum popular.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Art. 363° ter.- (alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos). El que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice, datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta un año o multa hasta doscientos días.

Sanciones civiles.

El código civil boliviano manifiesta:

Art. 18o- (DERECHO A LA INTIMIDAD).Nadie puede perturbar ni divulgar la vida íntima de una persona. Se tendrá en cuenta la condición de ella. Se salva los casos previstos por la ley. En lo que tiene que ver con daños y perjuicios el mismo código de manera general reza: Art. 984.- (RESARCIMIENTO POR HECHO ILICITO). Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento.

EL DERECHO A LA INTIMIDAD EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO.

En tiempos contemporáneos podemos encontrar un avance imparable de la tecnología informática misma que nos ofrece ventajas y desventajas. Motivo por el que tanto los bancos de datos públicos como privados así como los distintos medios de comunicación en especial las redes sociales, permiten en cierta medida llegar a lesionar derechos fundamentales como el de la intimidad y a dañar de forma negativa a los individuos sin que estos hayan tenido conciencia de lo realizado con sus mensajes y datos facilitados electrónicamente.

Es por ello que como veremos a continuación, la legislación ecuatoriana tanto en su constitución como en sus leyes privadas ha tratado de amparar este importantísimo derecho fundamental. Derecho que ha nuestro modo de pensar ya debería estar regulado con una ley especial de protección de datos.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

Capítulo VI

DERECHOS DE LIBERTAD

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:



UNIVERSIDAD DE CUENCA

18. "El derecho al honor y al buen nombre. La Ley protegerá la imagen y la voz de la persona".

Número 19: "El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley".

Número 20: "El derecho a la intimidad personal y familiar."

Número 21: "El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación"

En lo que tiene que ver a la sección de la Movilidad Humana:

Artículo 40.- El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria:

Número 5: Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior.

La garantía constitucional de habeas data que será objeto de análisis en el próximo capítulo, lo encontramos en:

Sección V

ACCIÓN DE HÁBEAS DATA

Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley.

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la



UNIVERSIDAD DE CUENCA

ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.

Otras leyes manifiestan lo siguiente:

Ley del sistema nacional de registro de datos públicos.

Art. 5.- Publicidad.- El Estado, de conformidad con la Ley, pondrá en conocimiento de las ciudadanas o ciudadanos, la existencia de registros o bases de datos de personas y bienes y en lo aplicable, la celebración de actos sobre los mismos, con la finalidad de que las interesadas o interesados y terceras o terceros conozcan de dicha existencia y los impugnen en caso de afectar a sus derechos.

Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.

El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial.

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado.

La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos.

Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el/la titular de la información pueda ejercer.

La Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los demás datos que integrarán el sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad.

Art. 8.- Rectificabilidad.- Los datos registrales del sistema son susceptibles de actualización, rectificación o supresión en los casos y con los requisitos que la ley señale.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos.

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.

Ley orgánica de transparencia y acceso a la información.

Art. 6.- Información Confidencial.-

Se considera información confidencial aquella información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República. El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar a las acciones legales pertinentes.

No podrá invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones que realicen las autoridades, públicas competentes, sobre violaciones a derechos de las personas que se encuentren establecidos en la Constitución Política de la República, en las 5 declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno. Se excepciona el procedimiento establecido en las indagaciones previas.

Código orgánico integral penal.

El artículo 11 numeral 4, dispone que la persona acusada, gozará de protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, extendiéndose también a sus familiares y testigos.

Por otro lado el numeral 5 del artículo 12, señala otro derecho primordial de las personas privadas de libertad, como es el respeto a su vida privada y la de su familia.

SECCIÓN SEXTA

Delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar.

Artículo 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Código civil ecuatoriano.

Art. 2214.-El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.

DERECHO A LA INFORMACION. Concepto.

Así como el derecho a la intimidad es inherente al ser humano y forma parte de su vida íntima, el derecho a la información también es un derecho fundamental de las personas, con la diferencia de que llega a ser parte de la vida pública y social de las mismas.

El derecho fundamental a la información además de respaldar el libre pensamiento de los ciudadanos, se estima que es el pilar base de un Estado democrático, aportando por ende a la realización de una sociedad con mayor transparencia y democracia. Considerando al Estado de derecho muerto, sin su presencia.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Artículo 19.-Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

De la misma forma la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice.

Art. 4 Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión, y de difusión del pensamiento por cualquier medio.

Autores como Dino Caro Coria, Rodolfo Daniel Uicich y otros, no sostienen un concepto claro de lo que es el derecho a la información, sino más bien se enrolan en lo que tiene que ver con las facultades o libertades que conforma el derecho a la información.

Perla Gómez Gallardo; sostiene que: “Es la rama del derecho que tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan los alcances y los



UNIVERSIDAD DE CUENCA

límites del ejercicio de las libertades de expresión y de información y sus derechos accesorios a través de cualquier medio”.¹⁹

Se podría decir que en palabras sencillas pero correctas Perla Gómez Gallardo, para nuestra forma de pensar da a conocer un concepto completo de lo que es el derecho a la información; dejando claro el objetivo de mencionado derecho fundamental.

DERECHO A LA INFORMACION EN EL DERECHO COMPARADO.

El derecho a la información a lo largo de los tiempos ha tenido una importante evolución jurídica, debido a los diversos avances tecnológicos, como son la radio, la televisión y el más importante el internet, facilitando consecuentemente el contacto y comunicación social al que el ser humano está destinado a tener con sus semejantes.

Estos factores llevan consigo la creación de distintas leyes y artículos como lo están contemplados en la Declaración Universal de los Derecho Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Convirtiéndose estas y otras declaraciones como punto de partida para la creación de los diversos cuerpos normativos de los diferentes países del mundo.

A continuación expondremos el contenido jurídico de algunos países de américa latina y España.

1.2.6 ESPAÑA.

CONSTITUCION ESPAÑOLA.²⁰

Artículo 20.N.-1. Se reconocen y protegen los derechos:

a)A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

¹⁹ Gómez, Perla, exposición sobre, “Conceptos básicos del derecho de información”, Internet. <http://alianzaregional.net>. Acceso: 22 de diciembre de 2016.

²⁰ Ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

d)A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

Artículo. 105.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.²¹

Objeto.

Artículo 1.-Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Derecho a la información pública.

Artículo 12.- Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

Pero este derecho tiene su límite no solo en lo que tiene que ver a la protección de datos personales sino también en los casos siguientes.

Artículo 14.- El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- a) La seguridad nacional.
- b) La defensa.
- c) Las relaciones exteriores.
- d) La seguridad pública.
- e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
- g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

²¹ Publicada el 10 de agosto de 2013.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

- h) Los intereses económicos y comerciales.
- i) La política económica y monetaria.
- j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
- k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
- l) La protección del medio ambiente.

Órgano de control.

Título III Consejo de transparencia y de buen gobierno.

Artículo 34.- Fines.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Acción de acceso a la información pública.

Sección 2.ª Ejercicio del derecho de acceso a la información pública

Artículo 17. Solicitud de acceso a la información.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas.

2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:

a) La identidad del solicitante.

b) La información que se solicita.

c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.

d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud.

4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión.

REPUBLICA DE ARGENTINA.

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA.²²

Artículo 38.-

Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.

Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, **el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.**

Artículo 41.-

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, **y a la información y educación ambientales.**

Artículo 42.-

Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; **a una información adecuada y veraz;** a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

Como podemos ver la constitución argentina no se refiere de una manera general explícita, ni directa al derecho a la información, pero gracias a la flamante ley de acceso a la información pública, despejaremos ciertas dudas.

²² Actualizada a la reforma de Diciembre de 1994.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.²³

Objeto.

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Derecho a la información pública.

Artículo 2.- Derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.

Órgano de control.

Artículo 19.- Agencia de Acceso a la Información Pública. Créase la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. La Agencia de Acceso a la Información Pública debe velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la presente ley, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa.

Acción de acceso a la información pública.

Artículo 9.- Solicitud de información. La solicitud de información debe ser presentada ante el sujeto obligado que la posea o se presume que la posee, quien la remitirá al responsable de acceso a la información pública, en los términos de lo previsto en el artículo 30 de la presente ley. Se podrá realizar por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante, a los fines de enviarle la información solicitada o anunciarle que está disponible.

El sujeto que recibiere la solicitud de información le entregará o remitirá al solicitante una constancia del trámite.

Artículo 14.- Vías de reclamo. Las decisiones en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante los tribunales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el reclamo administrativo pertinente ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o el órgano que corresponda según el legitimado pasivo. Será competente el juez del domicilio del requirente o el del domicilio del ente requerido, a opción del primero.

En ninguno de estos dos supuestos, podrá ser exigido el agotamiento de la vía administrativa.

²³ Publicada el 29 de septiembre de 2016.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

El reclamo por incumplimiento previsto en el artículo 15 de la presente ley, será sustitutivo de los recursos previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y en el decreto 1.759 del 3 de abril de 1972 (t.o. 1991).

El reclamo promovido mediante acción judicial tramitará por la vía del amparo y deberá ser interpuesto dentro de los cuarenta (40) días hábiles desde que fuera notificada la resolución denegatoria de la solicitud o desde que venciera el plazo para responderla, o bien, a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de esta ley. No serán de aplicación los supuestos de inadmisibilidad formal previstos en el artículo 2° de la ley 16.986.

Artículo 15.- Reclamo por incumplimiento. Ante los supuestos de denegatoria de una solicitud de información establecidos en el artículo 13 de la presente ley o ante cualquier otro incumplimiento a lo dispuesto en la presente, el solicitante podrá, dentro de un plazo de cuarenta (40) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la respuesta establecido en el artículo 11 de esta norma, interponer un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o, a su opción, ante el organismo originalmente requerido. Este último deberá elevarlo de inmediato y sin dilación a la Agencia de Acceso a la Información Pública para su resolución.

Sanciones.

Artículo 18. -Responsabilidades. El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información pública requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurre en falta grave sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que pudieran caberle conforme lo previsto en las normas vigentes.

MÉXICO.

CONSTITUCION POLÍTICA DE MÉXICO.²⁴

Artículo 6.-. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

²⁴ Actualizada a la reforma del 24 de febrero de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Ley general de transparencia y acceso a la información pública.²⁵

Objeto.

Artículo 1.-La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

Derecho a la información pública.

Artículo 4.-El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

Órgano de control.

Según esta ley el órgano de control es el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Conformada según el artículo 28 de la siguiente manera.

Artículo 28.- El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás normatividad aplicable.

²⁵ Publicada el 04 de mayo de 2015.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Artículo 29.-El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, contribuirá a la generación de información de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.

Artículo 30.-Son parte integrante del Sistema Nacional:

I.- El Instituto;

II.- Los Organismos garantes de las Entidades Federativas;

III.- La Auditoría Superior de la Federación;

IV.- El Archivo General de la Nación, y

V.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

TÍTULO SÉPTIMO

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I

Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 121.-Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.

TÍTULO OCTAVO

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN

EN MATERIA DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Del Recurso de Revisión ante los Organismos garantes

Artículo 142.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.

Capítulo II

Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto

Artículo 159.-Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de los Organismos garantes de las Entidades Federativas, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto o ante el Poder Judicial de la Federación.

TÍTULO NOVENO

MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

Capítulo I

De las Medidas de Apremio

Artículo 201.-Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, podrán imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

1.-Amonestación pública, o

2.-Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Área geográfica de que se trate.

ARTÍCULO 206.- La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las sanciones conforme a la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia. Asimismo, contemplarán el tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para su ejecución.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

PARAGUAY.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.²⁶

Artículo 28. - Del derecho a informarse

Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.

Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo.

Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios.

LEY DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.²⁷

Objeto.

Artículo 1.- La presente ley reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional, a fin de garantizar a todas las personas, el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, a través de la implementación de las modalidades, plazos, excepciones y sanciones correspondientes, que promuevan la transparencia del Estado.

Ninguna disposición de esta ley podrá ser entendida o utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo.

Derecho a la información pública.

Artículo 2.- Definiciones. A los efectos de esta ley, se entenderán como:

2. Información pública: Aquella producida, obtenida, bajo control o en poder de las fuentes públicas, independientemente de su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado por las leyes.

Órgano de control.

Artículo 6.- Órgano competente. Las fuentes públicas deberán habilitar una Oficina de Acceso a la Información Pública, en la que

²⁶ Promulgada 20 de junio de 1992.

²⁷ Publicada el 06 de julio de 2015.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

se recibirán las solicitudes, así como orientar y asistir al solicitante en forma sencilla y comprensible.

Acción de acceso a la información pública.

Artículo 12.- Forma y contenido. Toda persona interesada en acceder a la información pública, deberá presentar una solicitud ante la oficina establecida en la fuente pública correspondiente, personalmente, por correo electrónico, en forma escrita o verbal, y en este último caso, se extenderá un acta. La presentación contendrá la identificación del solicitante, su domicilio real, la descripción clara y precisa de la información pública que requiere, y finalmente, el formato o soporte preferido, sin que esto último constituya una obligación para el requerido.

ACCION JUDICIAL.

Artículo 23.- Competencia. En caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información o de cualquier otro incumplimiento de una repartición pública con relación a las obligaciones previstas en la presente ley, el solicitante, haya o no interpuesto el recurso de reconsideración, podrá, a su elección, acudir ante cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento la fuente pública.

Sanciones.

Artículo 28.- Sumario administrativo. El incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la presente ley, por parte de funcionarios y empleados públicos, también será considerado como falta grave e incurrirán en responsabilidad administrativa, por lo que serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ley N° 1.626/00 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" y en las disposiciones legales correspondientes.

Artículo 29.- Legislación aplicable. En el caso que el incumplimiento sea cometido por parte de un sujeto que no sea funcionario o empleado público, se aplicarán las sanciones establecidas en las disposiciones legales que rijan su relación laboral con la fuente pública a la cual pertenece.

Artículo 30.- Presunción. En los casos señalados en este Título, siempre se presumirá la buena fe y razonabilidad de los actos, de quien ejerce un cargo público.

BOLIVIA.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.²⁸

Sección I: Derechos civiles

²⁸ Ratificada el 25 de Enero de 2009 mediante Referéndum popular.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Artículo 21. N.-6 Las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.

Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario.

Artículo 106. I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

Debido a la falta de ley de acceso a la información pública que tiene Bolivia, a continuación exponremos el siguiente decreto.

DECRETO SUPREMO N° 28168.²⁹

Objeto.

ARTÍCULO 1.- El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el acceso a la información, como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 9.- MEDIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Las personas pueden acceder a la información pública de manera directa a través de páginas electrónicas, publicaciones o cualquier otro formato de difusión; y de manera indirecta, a través de la Unidad de Información que las Máximas Autoridades Ejecutivas habilitarán en cada una de las entidades bajo su cargo o a través de la Unidad existente a la que dicha Autoridad le delegue expresamente esta función.

ARTÍCULO 11.- ACCESO INDIRECTO. I. Los peticionantes, debidamente identificados, solicitarán la información de manera verbal o escrita a la Unidad de Información establecida al efecto.

II. El servidor público responsable llevará un registro de todas las solicitudes presentadas. La información será puesta a disposición del solicitante en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, salvo caso de negativa justificada en las causales establecidas en el presente Decreto Supremo.

²⁹ Del 17 de mayo de 2005.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

III. No será exigible la justificación del pedido ni el patrocinio de abogado para la presentación de solicitudes.

ARTÍCULO 16.- NEGATIVA INDEBIDA. En caso de negativa indebida, falta de respuesta o restricción ilegal al derecho a la información, el peticionario podrá acudir en queja ante la autoridad superior competente o el Defensor del Pueblo, o hacer uso de los recursos constitucionales, judiciales y administrativos vigentes en el ordenamiento jurídico.

EL DERECHO A LA INFORMACION EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO.

El derecho de acceso a la información pública, permite al ciudadano en general, indagar e instruirse a cerca de la información que poseen las distintas instituciones, organismos, entidades o personas jurídicas del Estado. Promoviendo la participación, debate y crítica de la sociedad, sobre las actividades de las entidades públicas, que podrían promover el desarrollo o retroceso de las mismas.

A continuación expondremos las distintas normas establecidas sobre el derecho constitucional a la información, tanto en la constitución ecuatoriana como en la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

TITULO II

DERECHOS

Capítulo segundo

Derechos del buen vivir

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Sección cuarta

Acción de acceso a la información pública

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.

LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.³⁰

Objeto.

Art. 2.- Objeto de la Ley.- La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes, de los cuales nuestro país es signatario.

TITULO CUARTO

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ACCEDER A LA INFORMACION PÚBLICA.

Art. 19.- De la Solicitud y sus Requisitos.- El interesado a acceder a la información pública que reposa, manejan o producen las personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular de la institución.

En dicha solicitud deberá constar en forma clara la identificación del solicitante y la ubicación de los datos o temas motivo de la solicitud, la cual será contestada en el plazo señalado en el artículo 9 de esta Ley.

TITULO QUINTO

DEL RECURSO DE ACCESO A LA INFORMACION.

Art. 2 .- El derecho de acceso a la información, será también garantizado en instancia judicial por el recurso de acceso a la información, estipulado en esta Ley, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional:

³⁰ Publicada el 18 de mayo de 2004.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Se encuentra legitimada para interponer el recurso de acceso a la información, toda persona a quien se hubiere denegado en forma tácita o expresa, información de cualquier índole a la que se refiere esta Ley, ya sea por la negativa de la información, ya sea por la información incompleta, alterada y hasta falsa que le hubieren proporcionado, incluso si la denegatoria se sustenta en el carácter reservado o confidencial de la información solicitada.

El recurso de acceso a la información se podrá interponer ante cualquier juez de lo civil o tribunal de instancia del domicilio del poseedor de la información requerida.

TITULO SEXTO

DE LAS SANCIONES

Art. 23.- Sanción a funcionarios y/o empleados públicos y privados.- Los funcionarios de las entidades de la Administración Pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, que incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública, entendiéndose ésta como información que ha sido negada total o parcialmente ya sea por información incompleta, alterada o falsa que proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados, según la gravedad de la falta, y sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, de la siguiente manera:

- a) Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o salario que se halle percibiendo a la fecha de la sanción;
- b), Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días calendario, sin derecho a sueldo o remuneración por ese mismo lapso; y,
- c) Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impuesta, se persistiere en la negativa a la entrega de la información.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

CAPITULO II: EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA INFORMACION, EN LA CONSTITUCION Y EL DERECHO TRIBUTARIO.

Tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la información al ser derechos fundamentales constan en la constitución ecuatoriana, de manera expresa y clara con sus respectivas figuras jurídicas que respaldan su efectividad.

No sucede lo mismo como ya lo anunciamos, en cuanto a las leyes específicas, ya que mientras el derecho a la información cuenta con la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, el derecho a la intimidad carece de esta importante legislación.

Por otro lado, dentro del código tributario nacional encontramos de forma expresa, como la administración tributaria cuenta con el derecho a la información y sus respectivas facilidades para la obtención de datos de sus contribuyentes. Pasando absolutamente lo contrario con el derecho a la intimidad, sin encontrar artículo que verdaderamente respalde tan importante derecho para el contribuyente.

A continuación, ya dentro del derecho tributario expondremos la acción del habeas data como el medio idóneo que la constitución ofrece para el amparo del contribuyente, así mismo desarrollaremos las facultades que el código tributario permite para la obtención por parte del fisco, de información y datos del sujeto pasivo, (considerado este como contribuyente).

2.1 EL DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO.

Como sabemos, la Constitución a más de ser la norma jerárquicamente superior a la normatividad general y la base de la seguridad jurídica del Estado, es un conjunto de principios y normas que se encuentran estrechamente vinculados entre sí.

Así mismo se podría decir que el derecho constitucional es la rama del Derecho Público Interno, que se encuentra íntimamente ligada con el estado,



UNIVERSIDAD DE CUENCA

sus diferentes funciones, su estructura y órganos, en concordancia con los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por lo dicho es evidente que el desarrollo de la doctrina constitucionalista influya de manera decisoria y directa en todas las ramas del derecho.

Partiendo de esta premisa y como rama autónoma del derecho, que innegablemente se ha constituido el derecho tributario, sería un error escapar a la influencia constitucionalista a las que se someten las distintas ramas del derecho.

Es precisamente en razón de ello que, el tema tributario se debe explicar partiendo de la perspectiva constitucional.

Aseguramos que existe esta inseparable relación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Tributario, debido a que este último encuentra en el derecho constitucional la razón y el fundamento de la potestad tributaria del Estado, materializándose de esta forma en los principios constitucionales tributarios, que se encuentran explícitos en la constitución.

En palabras sencillas es en el derecho constitucional, donde nacen las normas base que gobiernan la actividad de la administración tributaria.

Ahora bien con lo antes referido acudiremos a la doctrina existente, y expondremos los diferentes criterios sobre el Derecho Constitucional Tributario.

Rodolfo Spisso, define al Derecho Constitucional Tributario como: “El conjunto de principios y normas constitucionales que gobiernan la tributación.”³¹

Tal y como mencionamos en la introducción, la Constitución es un conjunto de principios y normas que se encuentran estrechamente vinculados entre sí;

³¹ Rodolfo Spisso, *Derecho Constitucional Tributario*, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1991, p. 1.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

entonces y como claramente lo explica el doctor Tiberio Torres³², este concepto sencillo pero contundente “debe ser entendido no solo como el conjunto de principios y normas constitucionales, independientes o aisladas, sino que por el contrario, la Constitución se erige como un haz de normas que se relacionan unas con otras en forma muy estrecha, amalgama en la que cada disposición está determinada por la influencia de todas y cada una de las demás que junto con ella forman el texto constitucional”. Ahora bien el mismo autor explica notoriamente, la relación íntima entre las normas constitucionales aplicadas a lo tributario, manifestando que. “La obligación constitucional del Estado de prestar a sus ciudadanos los servicios públicos suficientes y necesarios, está relacionada y condicionada por el respeto de los derechos de dichos ciudadanos, los cuales no pueden ser conculcados de ninguna forma so pretexto de cumplir con la prestación de los mencionados servicios”.

Para Héctor Villegas: “El derecho constitucional tributario estudia las formas fundamentales que disciplinan el ejercicio de la potestad tributaria y que se encuentran en las cartas constitucionales en aquellos países en que éstas existen. Estudia también las normas que delimitan y coordinan las potestades tributarias entre las distintas esferas de poder en los países con régimen federal de gobierno”.³³

Para Catalina García Vizcaíno: el derecho tributario constitucional es el conjunto de normas y principios que surgen de las constituciones y cartas, referentes a la delimitación de competencias tributarias entre distintos centros de poder (nación, provincias, estados) y a la regulación del poder tributario frente a los sometidos a él, dando origen a los derechos y garantías de los particulares, aspecto, este último, conocido como el de garantías de los

³² TIBERIO TORRES RODAS, *La protección de la intimidad en el derecho tributario*, Quito Ecuador Ed.

Abya-Yala, 2007, págs. 16 y 17.

³³ Héctor Villegas. *Curso de Finanzas, Derecho Financiero y tributario*, séptima edición. Buenos Aires. Ediciones Depalma, 1999, pg. 185



UNIVERSIDAD DE CUENCA

contribuyentes, las cuales representan, desde la perspectiva estatal, limitaciones constitucionales del poder tributario”³⁴.

A continuación, y a nuestro modo de pensar, este es un concepto completo pero sobre todo expresivo, al demostrar en su contenido que el derecho constitucional tributario a más de estudiar los deberes y derechos del estado y de sus respectivos contribuyentes; con claridad demuestra la vinculación íntima que debe existir entre los principios no solo específicos sino también generales que de una u otra manera direccionan la tributación.

Torres Rodas Tiberio afirma que: “El Derecho Constitucional Tributario es la rama del saber jurídico encargada de estudiar los derechos y obligaciones del Estado y de los particulares, en sus calidades de Fisco y contribuyentes respectivamente, en las relaciones derivadas de la tributación; así como de establecer los principios que regirán dichas relaciones”.³⁵

Existen distintos criterios de doctrinarios, a cerca de la pertenencia del derecho constitucional tributario. Unos como Héctor Villegas opinan que el derecho constitucional se aplica al derecho tributario manifestando que “El derecho constitucional tributario es una parte del derecho constitucional que sólo puede considerarse "tributario" por el objeto al cual se refiere”³⁶. mientras que otros, como manifiesta claramente Catalina Vizcaíno: “que pese al obvio contenido constitucional de sus normas debe comprendérsela dentro del derecho tributario, a los efectos de lograr una clara sistematización lógica de las normas que componen este derecho y para una mejor comprensión de sus conceptos e instituciones”³⁷.

³⁴ Catalina García. *Derecho Tributario, Consideraciones Económicas y Jurídicas*. Buenos Aires. Ediciones Depalma, 1996, pg. 219

³⁵ TIBERIO TORRES RODAS, *La protección de la intimidad en el derecho tributario*, Quito Ecuador Ed. Abya-Yala, 2007, pág. 18.

³⁶ Héctor Villegas. *Curso de Finanzas, Derecho Financiero y tributario*, séptima edición. Buenos Aires. Ediciones Depalma, 1999, pg. 185

³⁷ Catalina García. *Derecho Tributario, Consideraciones Económicas y Jurídicas*. Buenos Aires. Ediciones Depalma, 1996, pg. 219



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Nosotros, aparte de las diferentes opiniones que tranquilamente podrían ser motivo de realización de un trabajo investigativo, y apegados al criterio de Torres Rodas. Creemos que la apreciación más acertada, es la que media entre las dos opiniones antes expuestas.

Así, Torres Rodas manifiesta que: “El Derecho Constitucional Tributario es una rama dependiente de las dos disciplinas jurídicas, que no puede inclinarse hacia uno u otro lado, pues la necesaria compatibilidad de principios de una y otra, además de la indiscutible y necesaria interdependencia de uno con otro, hace que tenga esta particularidad; y que por tanto se encuentra en medio de las dos, sin alejarse ni acercarse a una en detrimento de la otra”.³⁸

2.2 EL HABEAS DATA COMO MEDIO DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA INTIMIDAD DEL CONTRIBUYENTE.

El Derecho de tipo constitucional llamado “habeas data”, que por cierto es de adhesión relativamente reciente en la legislación de nuestro país; nace como una garantía al llamado poder informático. Garantía que permite el acceso a ficheros, bancos de datos y registros en general, cuyo fin principal es rectificar, actualizar o cancelar toda aquella información inexacta, arbitraria, lesiva e incluso abusiva, que se podría generar por parte de entidades tanto públicas como privadas en contra de los ciudadanos en general.

Para entender de una manera más acertada, y cimentados en criterios de autores como: Galán Mercedes, Mulet Guillermo, Alicia Pierini, Valentín Lorences y María Inés Tornabene expondremos a continuación a criterio muy personal, un concepto claro sobre lo que es el derecho de habeas data.

Habeas Data es un derecho constitucional en el que cualquier persona sea natural o jurídica, que conste en algún banco de datos o registro, de institución pública como privada, pueda utilizar y ejercer un pedido para conocer la información personal que allí reposa, y en caso de que lo amerite o lo creyere

³⁸ TIBERIO TORRES RODAS, La protección de la intimidad en el derecho tributario, Quito Ecuador Ed. Abya-Yala, 2007, pág. 18.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

conveniente podrá solicitar su corrección o eliminación, si mencionada persona se sintiere inconforme; ya sea porque la información es inexacta, desactualizada o falsa.

El Habeas Data de esta forma actúa como una garantía a favor del correcto manejo de aquellos datos personales que reposan en terceros; impidiendo con esto, abusos de la intimidad que a la postre podrían causar inconvenientes a la persona afectada.

Así la Sala Primera del Tribunal Constitucional de Ecuador, dictada en Quito el 15 de octubre de 2008, mencionada por Daniel Carballo³⁹ en la que el Alto Tribunal afirma que “El Habeas Data es una garantía constitucional creada para salvaguardar el derecho a la autodeterminación informativa, esto es, mantener el control de los datos que existan sobre una persona o sobre sus bienes, y para proteger el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar”.

De la misma forma la sentencia del Caso 0065-2008-HD de la Sala Tercera del Alto Tribunal, redactada por Daniel Carballo, la aparición del derecho “habeas data” en la Constitución Política de la República es “creada para salvaguardar el derecho a la autodeterminación informativa, procura mantener el control de los datos que existan sobre una persona o sobre sus bienes, y para proteger el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar”⁴⁰.

La Constitución de la república del Ecuador en su Título III “Garantías Constitucionales”, en su Sección V “Acción de Hábeas Data”, en el artículo noventa y dos, nos dice:

Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y

³⁹ López Carballo, Daniel, Habeas Data, Constitución y Jurisprudencia en el Ecuador, <http://oiprodat.com/2012/01/24/habeas-data-en-ecuador/>, 10 de Enero de 2017.

⁴⁰ Ibídem.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley.

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.

Como podemos notar, el primer inciso indica con precisión que toda persona sea natural o jurídica, tiene derecho a interponer la acción de Hábeas Data sobre la información almacenada no solo en bancos de datos sino también como claramente manda la norma en informes y documentos en general; mismos que pueden reposar en instituciones tanto públicas como privadas. Dicha información, aclara el articulado, debe versar únicamente sobre la persona directamente afectada o sobre sus bienes.

Ya en la parte tributaria este inciso no ampara únicamente los datos personales del contribuyente, sino que además de forma correcta e importantísima para el derecho tributario incluye; “o sobre sus bienes,” afirmando con esto la tesis de diversos autores, que la intimidad no tiene solo que ver con la parte, interna, de la persona, sino que además de eso la intimidad la compone los bienes que aquella posee.

Este segundo inciso es clave ya que se constituye en el punto medio; limitando el actuar de los poseedores de la información (administración tributaria), obligándolos a proceder con responsabilidad, debido a que en caso de publicar dicha información almacenada, se lo realice tomando en cuenta el principal requisito que es la autorización del titular de la información (contribuyente) o con autorización de la ley.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

El tercer inciso de manera clara, a más de permitir al titular de los datos, solicitar una copia de la información que conste ya sea de forma digital o física y que la institución posea sobre si, permite también la actualización, rectificación, eliminación o anulación de la información errónea del titular de los datos, diligencias que según el artículo deberán realizarse sin costo alguno. En caso de que su solicitud no fuere atendida, el titular de la información está facultado para iniciar un proceso judicial presentando una demanda ante la jueza o juez de primera instancia.

Entonces al existir la garantía que a raja tabla debe cumplir la administración tributaria sobre el acceso a la información personal que tiene cada contribuyente, es sin duda y por ende correcta la solicitud que podría pedir la persona afectada, a cerca del manejo de la información que posea sobre Él; facultándolo además la ley a la rectificación, eliminación o actualización, en caso de que la información sea errónea.

En la parte faltante del tercer inciso: “en el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias”⁴¹, entonces, en el caso de existir datos sensibles, los administradores de la información (administración tributaria) necesitan la autorización del titular de los datos (contribuyente) o de la ley, además de la adopción de las medidas necesarias para mantener en reserva dicha información.

Para entender de mejor manera, que son datos sensibles; expondremos la jurisprudencia colombiana establecida en el artículo cinco de la ley estatutaria 1581: sobre las disposiciones generales para la protección de datos personales.

Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los

⁴¹ Constitución ecuatoriana



UNIVERSIDAD DE CUENCA

derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.⁴²

En su parte final el artículo noventa y dos reza: “La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados”, es decir que la persona perjudicada en nuestro caso el contribuyente, está en la facultad de demandar ante un juez o jueza una indemnización por perjuicios, que según nuestro código civil comprende el daño emergente, entendido como: “El detrimento, menoscabo o destrucción material de los bienes, con independencia de los efectos patrimoniales o de otra índole que el mal origine”.⁴³ Y el lucro cesante como: la ganancia o beneficio que se ha dejado de obtener por obra de otro, perjudicial para propios intereses”.⁴⁴

Luego de un breve análisis sobre el derecho de habeas data y su contenido en el artículo noventa y dos de nuestra Constitución. Abordaremos ahora si de forma directa la importancia del habeas data como medio idóneo de protección a la intimidad del contribuyente.

El vínculo directo que existe entre la administración tributaria y el contribuyente, generan sin lugar a duda un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto para la una parte como para la otra. Uno de los derechos más relevantes con el que cuenta la administradora de tributos es el de la información, traducido este al acceso legal que tiene la administración a los datos del contribuyente, acceso que llegaría a convertirse en el medio eficaz para la recaudación de tributos.

Es aquí donde el derecho antes referido, podría en un momento dado confrontarse con el derecho constitucional a la intimidad y al buen uso que la administración tributaria debe realizar sobre la información del contribuyente. Cumpliendo en esta contradicción un papel preponderante el derecho constitucional del habeas data.

⁴² Publicada el 17 de octubre de 2012.

⁴³ Guillermo Cabanellas. Diccionario Jurídico Elemental. Decimonovena edición. Viamonte. Editorial Heliasta, 2008, Pág. 119.

⁴⁴ Guillermo Cabanellas. Diccionario Jurídico Elemental. Decimonovena edición. Viamonte. Editorial Heliasta, 2008, Pág. 241.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Tal y como lo analizamos en líneas anteriores, el artículo noventa y dos de la constitución, obliga a toda institución pública o privada y en nuestro caso a la administración tributaria a cumplir con la garantía de acceso a la información, que tiene todo contribuyente, además de conocer el uso que se dan a los datos que en ella reposan, su finalidad y el origen y destino de los datos personales.

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control constitucional en su artículo 49 afirma señalando que:

La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivo o banco de datos, el acceso sin costo a la información antes referida, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. No podrá solicitarse la eliminación de datos personales que por disposición de la ley deban mantenerse en archivos públicos.

Refiriéndose al mismo tema Osvaldo Soler ratifica diciendo que:

El hábeas data habilita a cualquier contribuyente a tomar conocimiento en forma rápida y expedita de los datos personales obrantes en ella, facultándolo, además, en su caso, a requerir la rectificación o supresión de aquellos datos falsos o desactualizados. Este instituto ha de cobrar relevancia como una herramienta eficaz para los contribuyentes y responsables, ante la progresiva utilización por parte del organismo fiscal de sistemas de información con el fin de supeditar, en ocasiones, el tratamiento fiscal de los mismos a su situación registral en la mencionada base de datos.⁴⁵

⁴⁵ Osvaldo Soler, Derechos y defensas del contribuyente frente al fisco, Buenos Aires, La Ley, Fondo Editorial de Derecho y Economía, FEDYE, 2001, p. 112.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Pese a que la constitución la ley y la doctrina son claras, la administración tributaria basada en el artículo noventa y nueve del Código Tributario tiene una concepción diferente sobre la información entregada a ella.

Artículo 99 del código tributario:

Artículo 99. Carácter de la información tributaria.- Las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la administración tributaria.

La administración tributaria, deberá difundir anualmente los nombres de los sujetos pasivos y los valores que hayan pagado o no por sus obligaciones tributarias.

En este contexto existen opiniones sobre que la información adquirida por la administración tributaria debe ser utilizada únicamente para sus propios fines; es decir nada como por ejemplo la publicación de información de algún contribuyente, puede entorpecer el trabajo de la administración tributaria.

Situación errada debido a que la publicación de dicha información no se la está facilitando a cualquier gente sino que es precisamente la persona dueña de la información quien solicita mencionados datos.

Entonces afirmando lo que manifiesta la Constitución Ecuatoriana y La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Carlos Alvear dice: “Modernamente, la doctrina ha sustentado la existencia del llamado derecho a la autodeterminación informativa, el cual consiste, en términos generales, en la potestad soberana que tiene toda persona a ser solo él quien determine qué información suya va permitir que pueda estar en contacto y conocimiento de terceros ajenos a él y extraños a su núcleo familiar. El titular de la información resolverá, qué datos e información suya en general, merece ser rectificadas, actualizadas, reservadas o anuladas, pues es él por lógica quien sabe qué información suya es correcta o



UNIVERSIDAD DE CUENCA

no, qué vale la pena aclarar, rectificar, actualizar o anular y qué información no le afecta que pueda ser de conocimiento público”.⁴⁶

En lo referente a los cruces de información que no son más que el intercambio que se puede dar entre la administración tributaria, sobre los datos de un contribuyente, entre otros con fines recaudatorios. Es pertinente puntualizar que a opinión de Torres Tiberio:

“Los cruces de información tan utilizados por las diferentes administraciones tributarias son a nuestro entender plenamente aplicables, siempre que no se lesionen los derechos de las personas y que no llegue a divulgarse información que afecte a la intimidad personal”.⁴⁷

Con todo esto queremos decir que aunque el contribuyente se vea obligado a proporcionar información a la administración tributaria, en todo momento se debe garantizar el derecho a la intimidad, al honor, buen nombre y en general al derecho a la protección de datos personales. Datos que aunque la administración tributaria los archive y maneje no quiere decir que el contribuyente dueño de los datos deje de ser su titular.

2.3 FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.

Para que exista una adecuada y eficaz aplicación de los tributos, es necesario generar una mayor y por consiguiente cada vez más compleja colaboración por parte de la ciudadanía en general.

Colaboración que dicho sea de paso se torna riesgosa, debido a diversos criterios e intereses que las partes tienen; por un lado el interés de la administración tributaria, para una mejor recaudación de impuestos y, por otra

⁴⁶ Alvear, Carlos. “Régimen procesal del hábeas data en el Ecuador”, Internet, <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/24-regimen-procesal-del-habeas.pdf>. Acceso 18 de febrero de 2017.

⁴⁷ TIBERIO TORRES RODAS, La protección de la intimidad en el derecho tributario, Quito Ecuador Ed. Abya-Yala, 2007, pág. 67



UNIVERSIDAD DE CUENCA

parte, el interés de los contribuyentes, en defender, de manera principal el derecho fundamental a la intimidad.

Toda esta contradicción requiere entonces del cumplimiento estricto de las normas legales, tanto por parte de la administración tributaria cuanto por parte de los ciudadanos, llegando con esto a una constante y eficiente garantía de sus derechos.

El vigente y cada vez mejorado nivel tecnológico, brinda una gran ventaja para el manejo adecuado de la información, provocando de forma progresiva menos costos a sus contribuyentes.

Con estos antecedentes, para la Administración Tributaria uno de los elementos necesarios, importantes, e incluso imprescindibles, tanto como contar con recursos físicos o humanos, es la de disponer de información por parte de los contribuyentes, ya que por medio de la misma es posible realizar redes de atención rápidas pero sobre todo eficientes que beneficien y faciliten el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, logrando además con esto fiscalizar y contrarrestar la evasión tributaria.

La potestad y quizá la más importante con la que cuenta la administración tributaria es precisamente la facultad que tiene de poder requerir información a sus contribuyentes.

Sin embargo, la capacidad antes dicha se encuentra atada a determinados límites. Ya que si la Administración tuviese la potestad de adquirir cualquier tipo de información, inobservando si el contenido lesiona o no derechos fundamentales, el contribuyente en este caso se encontraría desamparado frente a un poder totalitario de la Administración.

Precisamente para poder determinar a qué límites está sujeta la administración tributaria es importante conocer el contenido que engloba las palabras “trascendencia tributaria” contenido que daría las pautas necesarias para evitar que la Administración incumpla con el derecho a la intimidad.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

“Son datos con transcendencia tributaria aquellos hechos o actos que puedan ser útiles a la Administración para, con respeto a los derechos fundamentales, y de acuerdo con la Ley, averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación establecida en la Constitución de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, y poder, en caso contrario, obrar en consecuencia.”⁴⁸

Por lo tanto este requerimiento de la información debe realizarse únicamente con datos tributariamente trascendentes y según sea necesario para el esclarecimiento de la actuación que se realiza; dejando con esto al margen información innecesaria para el cumplimiento de las funciones tributarias.

En resumidas cuentas este pedido de información a la cual le está permitida la administración tributaria tiene como límite ineludible, que los datos averiguados deben ser de transcendencia tributaria.

Esta tesis es ratificada por Juan Manuel Herrero de Egaña al decir que:

Para el efectivo cumplimiento del deber [de contribuir] es imprescindible la actividad inspectora y comprobatoria de la Administración tributaria, ya que de otro modo se produciría una distribución injusta en la carga fiscal. Con esto ratificamos que el deber de comunicación de datos con **relevancia tributaria** se convierte, entonces, en un instrumento necesario no sólo para una contribución justa a los gastos generales sino también para una gestión tributaria eficaz; demostrando que la información no sólo es necesaria sino que es quizás el activo más importante que tiene una Administración tributaria.⁴⁹

Entonces el deber de información asiste a una correcta aplicación de los tributos, y su estudio puede desarrollarse desde distintas perspectivas. Así, puede analizarse atendiendo al sujeto obligado y entonces puede

⁴⁸ “La transcendencia tributaria en la obtención de información por parte de la Administración Tributaria”. Internet. <http://www.lexland.es>. Acceso: 21 de febrero de 2017.

⁴⁹ Herrero de Egaña, Juan Manuel. “Intimidad, tributos y protección de datos personales”. Internet. file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/78573-102903-1-PB.pdf. Acceso: 21 de febrero de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

hablarse de información relativa a la propia situación tributaria, o información que terceras personas pudieren proporcionar sobre la obligación tributaria de otro sujeto.

A continuación analizaremos el fundamento legal que posee la administración tributaria del Ecuador sobre el deber de información.

Código tributario del ecuador.⁵⁰

Capítulo III

Deberes formales del contribuyente o responsable:

Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o responsables:

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva autoridad de la administración tributaria:

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen;

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita;

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca.

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo.

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas.

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea requerida por autoridad competente.

Dicho artículo en lo que se refiere al tema en análisis lo expondremos de la siguiente forma:

⁵⁰ Actualizado a la última reforma del 22 de mayo de 2016



UNIVERSIDAD DE CUENCA

En primer lugar el contribuyente, al inscribirse o al realizar algún cambio sobre el hecho imponible, está obligado a brindar la información oportuna y necesaria para el cumplimiento óptimo de dicha actividad.

En segundo lugar, se trata del registro de las actividades que se realizan, es decir que el contribuyente está en la obligación de llevar los libros y registros contables relacionados con la actividad económica correspondiente a su ocupación, para ser presentados debidamente cuando los funcionarios lo requieran. Además que deberán anotarse o conservarse, hasta que la obligación tributaria lo determine o prescriba.

Seguidamente tal y como manifiesta la norma se tiene que presentar las declaraciones que correspondan, con la finalidad de determinar los tributos; Presentando con esto también los documentos e informes que exijan las normas correspondientes.

Y por último el administrado está en la obligación de asistir a las oficinas de la Administración Tributaria cuando la presencia del contribuyente sea solicitada por la autoridad competente para exhibir ante los funcionarios los respectivos comprobantes, libros de asientos contables, informes y cualquier otro documento que ayude a verificar los hechos generadores de tributos. Y en el caso de ser necesario realizar las debidas aclaraciones que la administración lo solicitare.

Art. 97.- Responsabilidad por incumplimiento.- El incumplimiento de deberes formales acarreará responsabilidad pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sea persona natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

Es decir y como claramente expone la norma, en caso de darse la falta de colaboración de los deberes formales. A más de las responsabilidades civiles o penales a las que hubiere lugar, el sujeto pasivo deberá abstenerse a una sanción pecuniaria.

Art. 98.- Deberes de terceros.- Siempre que la autoridad competente de la respectiva administración tributaria lo ordene, cualquier persona natural, por sí o como representante de una persona jurídica, o de



UNIVERSIDAD DE CUENCA

ente económico sin personalidad jurídica, en los términos de los artículos 24 y 27 de este Código, estará obligada a comparecer como testigo, a proporcionar informes o exhibir documentos que existieran en su poder, para la determinación de la obligación tributaria de otro sujeto.

No podrá requerirse la información a la que se refiere el inciso anterior, a los ministros del culto, en asuntos relativos a su ministerio; a los profesionales, en cuanto tengan derecho a invocar el secreto profesional; al cónyuge, o conviviente con derecho, y a los parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad.

Este artículo en cuanto a las terceras personas, sean estas naturales por sí mismas, personas jurídicas o entes económicos a través de sus representantes, podrán ser llamadas a declarar la información necesaria ante la administradora de tributos cuando el caso lo amerite y esta crea necesario hacerlo, buscando con esto la determinación de asuntos tributarios de otras personas.

El inciso seguido indica con claridad que las únicas personas que se encuentran exentas de esta obligación son los ministros de culto en asuntos que se refieren al ejercicio de su ministerio, los profesionales por el secreto profesional, y el cónyuge además de los parientes hasta el cuarto grado consanguinidad y segundo de afinidad.

La facultad que tiene la administración tributaria para la obtención de información, se convierte de este modo en la herramienta más importante con la que cuenta la administración tributaria, para una mejor y eficaz gestión. Demostrando con esto que la organización tributaria puede tener, un cuerpo normativo muy avanzado, sus funcionarios en continua preparación y además contar con los materiales y medios físicos idóneos. Pero sin la información necesaria sobre sus contribuyentes, dicha administración carecería de total eficacia.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

CAPITULO III: CONFLICTO ENTRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA INFORMACION.

Este conflicto se ha convertido en uno de los más importantes de la sociedad actual, donde se intenta coordinar el interés público de la información, con el derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen.

El derecho a la información y el derecho a la intimidad al ser derechos fundamentales reconocidos por nuestra constitución, se constituyen en los pilares base para el funcionamiento correcto del estado democrático y la convivencia en sociedad.

El avance científico y tecnológico ha empujado cada vez más a una fuerte y complicada confrontación entre el derecho que protege la injerencia de terceros a la vida íntima y privada de las personas, y el derecho, que nos permite buscar y recibir una información fidedigna y oportuna que facilite un mejor desenvolvimiento personal. Sin embargo estos derechos fundamentales sabiéndolos encaminar se convierten en la vía al desarrollo pleno de una sociedad en democracia.

Ciertamente es que, este conflicto no se da por el escaso desarrollo de la doctrina, de la ley o de la jurisprudencia de los dos derechos. Se produce más bien porque de forma usual al ejercer el derecho a informar y ser informado se produce invasiones al espacio de la vida privada de otras personas. Originándose principalmente en nuestro país porque no hay un límite que sea capaz de determinar anticipadamente, lo que es o no permitido.

Por ello es necesario definir el terreno en el que deben actuar los dos derechos, tratando con esto de organizar un control de los hechos que ayudan a divulgar la intimidad de los ciudadanos, buscando con este lindero compatibilizar el derecho a la información, con el deber de mantener integra la intimidad del ser humano.

Ya en el caso que se produjere un conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, sería ahí si sumamente necesario analizar cuál de



UNIVERSIDAD DE CUENCA

ellos debería prevalecer. Tema que a más de ser extenso no es nada fácil para la doctrina y la jurisprudencia.

A continuación expondremos los diferentes puntos de vista sobre la prevalencia de uno u otro derecho.

3.1 TEORÍA QUE DA PRIMACÍA AL DERECHO A LA INTIMIDAD.

María Isabel Garrido Gómez, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá de España, dice que “hoy en día, en la llamada sociedad de la información, adquiere gran relieve el reconocimiento y la garantía del derecho a la intimidad. Este derecho tiene una honda raigambre, pero es en la actualidad cuando ha adquirido una nueva comprensión, siendo uno de los derechos más vulnerados”.⁵¹

Es por eso que la posibilidad de que exista un conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información es real, ya que los avances tecnológicos y sobre todo el internet son entes que facilitan la divulgación amplia e inmediata de los hechos y sobre todo de la información sensible e íntima que poseen las personas.

Los autores que defienden esta creencia se basan en la teoría de los derechos naturales, derechos inherentes al hombre desde su nacimiento, y en los conceptos humanistas que consideran al hombre como un sujeto más no un objeto. De la misma manera, estiman que el valor fundamental que posee todo individuo es su dignidad, considerada esta como intimidad, convirtiéndose este en límite de la libertad de expresión.

En algunas sentencias y doctrina norteamericana el derecho a la intimidad se lo ha tomado como el “derecho a ser dejado solo”. Tomándolo como un ámbito reservado para su vida, y convirtiéndola en una necesidad inherente al ser humano.

⁵¹ Bautista, “Félix. La expresión y la intimidad”. Internet.<http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2012/05/02/230920/la-expresion-y-la-intimidad>. Acceso: 25 de febrero de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Esta concepción también se ha generalizado en la mayoría de los países europeos lo que ha determinado que existan marcos legales coincidentes, como el Convenio de Roma de 1950 (CEDH) y el Convenio N° 108 del Consejo de Europa. Mismos que protegen la intimidad y la privacidad de las personas frente a los nuevos avances informáticos y tecnológicos.

Siguiendo esta línea de pensamiento Picasso, citado por Morales Godo, sostiene que: “Entre los derechos del individuo, la defensa de la intimidad exige primacía. El sistema democrático debe defender la región inviolable del individuo. Si, so pretexto de la libertad de expresión, se invade la vida privada, el derecho político degenera en un fin en sí mismo”.⁵²

Otros autores de forma similar afirman.

Por su parte, el Peruano, Bernal Ballesteros opina: “Que en caso de conflicto entre el derecho a informarse de una persona y el de la intimidad del otro, debe protegerse este último; el primero llega a uno de los bordes que no puede atravesar: el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otro”.⁵³

Alberto Borea sostiene que: “El derecho a la intimidad es propio de los seres humanos que para su desarrollo requieren de un ámbito impenetrable en donde pueden construir sus relaciones afectivas y donde pueden expresar sin inhibiciones sociales sus propios sentimientos. Cualquier intromisión en ese artículo íntimo y personal es una violación a la privacidad”.⁵⁴

Matilde M Zabala de González: afirma que “la intimidad responde a la necesidad básica de preservar una libertad espiritual indispensable en el campo vital que circunda al hombre de manera próxima e interior, eliminando intromisiones, fiscalizaciones e influencias foráneas susceptibles de alterar su tranquilidad”.

“Y esta libertad no es solo la posibilidad de despliegue o represión de movimientos voluntarios o de obrar sin presiones psíquicas externas; es, más ampliamente, el poder de ser en sí mismo y no únicamente en los otros; de actuar según los dictados de la voluntad, pero también de hacerlo al reparo de los demás, sin indeseadas proyecciones al mundo exterior ni forzadas penetraciones de éste en la intimidad del sujeto”.

⁵² Revista Jurídica Cajamarca, “Conflicto jurídico entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información”. Internet. <http://www.derechoycambiosocial.com>. Acceso: 27 de febrero de 2017.

⁵³ *Ibíd.*

⁵⁴ Revista Jurídica Cajamarca, “Conflicto jurídico entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información”. Internet. <http://www.derechoycambiosocial.com>. Acceso: 27 de febrero de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

“Bajo este enfoque se trata de las primera de las libertades que al ser humano corresponden, y la única quizás que no puede ser suprimida de modo absoluto, porque si tal sucediera ello significaría que, ante el derecho, el ser humano se habría convertido en una cosa, el sujeto en objeto, y habiendo perdido la persona su consideración de tal, mal podría asumirse la titularidad de un patrimonio moral”.⁵⁵

3.2 TEORÍA QUE DA PRIMACÍA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN.

Según Sergio López Ayllón: “El derecho a la información (o la libertad de expresión o la libertad de información) comprende tres facultades interrelacionadas: las de buscar, recibir o difundir informaciones, opiniones o ideas, de manera oral o escrita, en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento. En este sentido, tal derecho incluye las libertades tradicionales de expresión e imprenta, pero es más amplio debido a que extiende la protección no sólo a la búsqueda y difusión, sino también a la recepción de informaciones, opiniones o ideas por cualquier medio”.⁵⁶

Con esta premisa existen autores que manifiestan que el derecho a la intimidad, es simplemente el resultado del hecho de vivir en sociedad, además de que es un derecho que le permanece como algo profundamente arraigado en la parte espiritual y cultural de la persona. Es decir es un derecho de la personalidad y nada más que eso.

Por otro lado manifiestan que el derecho a la información es uno de los derechos fundamentales del hombre. Por lo cual, se convierte en un derecho que compromete a toda una sociedad, más no a un sujeto individual cualquiera. Entonces se diría que en caso de conflicto, éste prevalecerá sobre aquel. Porque el derecho de la comunidad a tener conocimiento de lo que sucede a su alrededor comprende una mayor importancia que la vida privada de una persona.

⁵⁵ Zabala de González Matilde. *Derecho a la intimidad*. Buenos Aires, Argentina, Editorial Abeledo- Perrot S.A, 1982, pags, 25 y 26.

⁵⁶ López, Sergio, “El derecho a la información como derecho fundamental”. Internet. <https://archivos.juridicas.unam.mx>. Acceso: 28 de febrero de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Así, JOSÉ BERMEJO afirma que: “... El derecho a la información se ha convertido, junto a la libertad de expresión, en piedra de toque de los demás derechos y libertades, porque, según veremos, se configura ‘como una libertad situada más arriba del cielo de los conceptos jurídicos: una libertad supraconstitucional, incondicionadamente preferente a cualquier otro derecho constitucional, regida por un diferente sistema de frenos y equilibrios, autorregulada, auto controlada, exenta, en fin, intocable para cualquier otro poder externo’⁵⁷

El referido autor, también señala que: “Lo importante es, sin embargo, la razón de ser y el alcance de esta posición preferente de la libertad informativa sobre los demás derechos fundamentales, y aún el alcance exacto de esa preferencia. Dice el Tribunal Constitucional que esta posición preferente obedece a que: ‘en la base de toda sociedad democrática está la formación de una opinión pública, libre y plural que, en principio y salvo excepcionales limitaciones, puede tener acceso a la información que afecta el funcionamiento de las instituciones públicas’.

3.3 TEORÍA SOBRE LA PONDERACIÓN DE DERECHOS.

A criterio personal creemos que las teorías antes mencionadas, en el supuesto caso de darse una colisión entre estos derechos fundamentales, tanto la una como la otra teoría, de una forma absolutista, afirman categóricamente la prevalencia ya sea en el primer caso del derecho a la intimidad, o en el siguiente supuesto de la primacía del derecho a la información; no son las más acertadas ya que es un hecho de que no existen derechos absolutos, ni tampoco que unos derechos fundamentales prevalecen sobre otros (excepto el derecho a la vida).

Carlos Bernal Pulido señala: “Que los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para quien la única manera de aplicar el derecho era la subsunción. A partir de las

⁵⁷ Revista Jurídica Cajamarca, “Conflicto jurídico entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información”. Internet. <http://www.derechoycambiosocial.com>. Acceso: 28 de febrero de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

investigaciones de Dworkin en el mundo anglosajón y de Alexy en el germánico, se suman los principios y la ponderación. La ponderación es la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario.”⁵⁸

Prosigue el mismo autor: “Dworkin señala que los principios están dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Al ponderarse, se establece cuál principio pesa más en el caso concreto. El principio que tenga un mayor peso será el que triunfe en la ponderación y aquel que determine la solución para el caso concreto. La ponderación es entonces la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas.

Por su parte Carlos Delpiazzo manifiesta que: “Partiendo de la necesaria interpretación armónica de los derechos, impuesta no sólo por la unidad del sujeto humano, sino también por la regla general de interpretación constitucional sistemática, en casos de concurrencia de derechos, la labor del intérprete debe centrarse en pensar cada uno de los derechos en juego desde su contenido esencial, a efectos de determinar, no el “peso” concreto de los mismos para apreciar cuáles más importante o cuál debe rendirse, sino cuál de ellos comparece y cuál no en el caso concreto”.⁵⁹

Por otra parte la Sala Primera del Tribunal Constitucional de España en SENTENCIA 2/1982, de 29 de enero, manifiesta: “En efecto, no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites que, como señalaba este Tribunal en Sentencia de 8 de abril de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de abril) en relación a los derechos fundamentales, establece la Constitución

⁵⁸ Ponderación constitucional”. Internet.

<https://edwinfigueroag.wordpress.com/2010/08/31/ponderacion-constitucional/>. Acceso: 01 de marzo de 2017

⁵⁹ Delpiazzo, Carlos. “A la búsqueda del equilibrio entre privacidad y acceso. Internet.

<http://docplayer.es/7112746-A-la-busqueda-del-equilibrio-entre-privacidad-y-acceso.html>. Acceso: 01 de marzo de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

por sí misma en algunas ocasiones, mientras en otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos.⁶⁰

En palabras concretas y como bien lo exponen los tratadistas anteriormente mencionados, podríamos considerar que todos los derechos fundamentales son iguales y equivalentes entre sí, por lo que sería imprescindible su respectiva ponderación.

Dicho de esta forma en el momento que se dé la colisión entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información la solución eficaz sería el conceder la preferencia del uno en favor del otro según las circunstancias de cada caso y con ello decidir qué interés merece mayor protección,

Con esto queda claro que no se trata, de establecer jerarquías de uno u otro derecho ni tampoco de constituir preferencias a priori, sino de armonizar correctamente en la situación jurídica del momento, los dos derechos fundamentales; pesando y por consiguiente ponderando cada uno de ellos, para con esto dar prioridad al que mejor se acople al verdadero fin que persigue la constitución y la ley. Con esto queda claro entonces, que en ciertas situaciones predominará un derecho y en otras ocasiones prevalecerá otro, esto sería según las circunstancias puntuales del conflicto a dar solución.

3.4 EL DERECHO A LA INTIMIDAD FRENTE AL DERECHO A LA INFORMACIÓN.

Como ya lo dijimos en líneas anteriores el derecho a la información se define como el derecho de una persona de buscar y recibir información en poder del gobierno u administraciones públicas y se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática. Además Es una prerrogativa de todas las personas, sin importar su edad, sexo, religión,

⁶⁰ "Tribunal Constitucional de España". Internet.
<http://hj.tribunalconstitucional.es/eu/Resolucion/Show/44>. Acceso: 02 de marzo de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

condición social, orientación sexual, nacionalidad, etnia, discapacidad o alguna otra característica física, intelectual, profesional o patrimonial existente; para ser informadas de la actuación del Estado. Es también un mecanismo que garantiza la rendición de cuentas del Estado.⁶¹

Por su lado el derecho a la intimidad consiste en la defensa de la persona en su totalidad a través de un muro que prohíbe publicar o dar a conocer datos sobre temas como la religión, la política o la vida íntima.⁶²

Con este preludio, en su gran mayoría en el instante que se ejerce el Derecho fundamental a la Información se demuestra por lo general una tendencia a transgredir el derecho a la intimidad, demostrando con ello que serían derechos contrarios por naturaleza, pues en su gran mayoría el ciudadano que va a vulnerar el derecho a la intimidad lo hará a nombre del derecho a la información y viceversa. Teniendo como uno de los principales agentes para que se produzca este rose entre derechos, a la informática.

Por lo mismo decimos que a pesar de que parecen derechos opuestos, tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la información están fuertemente ligados entre sí, debido a que un derecho es el límite de acción del otro.

Dicho de esta manera tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la información son ejes centrales en los diferentes estados democráticos representativos actuales, ya que por un lado gracias al importante derecho a la información los ciudadanos puede hacer efectivo el control eficiente sobre las decisiones que tomen las diferentes autoridades y entidades del sector público y por otro lado por medio del derecho a la intimidad efectivizar dicho derecho determinando cada ciudadano en forma libre quien y en qué condiciones se deberá manejar sus datos.

⁶¹ "Wikipedia". Internet.
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_acceso_a_la_informaci%C3%B3n. Acceso: 02 de marzo de 2017.

⁶² *Ibíd.*



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Consecuentemente el derecho a la intimidad como a la información son inherentes al ser humano y por ende deben estar presentes, con la tutela suficiente dentro de un estado democrático.

Tomando en cuenta el inevitable conflicto que podría darse entre los dos derechos fundamentales y más aún en la vital importancia de los mismos dentro de un estado democrático, sin duda alguna es necesario, más que limitar, regular aquellos derechos, afrontar en primer lugar el conflicto con ponderación y sentido de la realidad, buscando con esto llegar a un adecuado punto de equilibrio entre ambos derechos, utilizando además los medios correspondientes para la protección del derecho a la intimidad y el derecho a la información pero evitando eso sí, de no caer en posiciones extremistas.

Dentro de este entorno entonces de forma personal creemos que se debería de desarrollar las nuevas normas concernientes al derecho a la información y el derecho a la intimidad.

3.5 IMPORTANCIA DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y DE INFORMACIÓN EN EL DERECHO TRIBUTARIO.

Importancia del derecho a la intimidad.

Es sin duda, escasa por no decirlo indiscutible la legitimidad del derecho a la información dentro del derecho tributario, pero aquello no supone decir que se convierta en un cheque en blanco o derecho absoluto, a favor de la administración tributaria, sino que más bien es uno de los derechos de mayor relevancia para el fisco, pero que tiene como límite el derecho a la intimidad.

El derecho a la intimidad así como el derecho a la información, debido al progresivo avance tecnológico, han sido y serán, objeto de estudio permanente con el único e importante objetivo de disminuir las diferentes tensiones existentes entre la Administración tributaria y los contribuyentes.

Uno de los conflictos por no decir el más importante, es que los derechos del contribuyente aprendan a coexistir con el deber que la constitución manda,



UNIVERSIDAD DE CUENCA

como es el de contribuir con el Estado, y para una justa y eficaz contribución es indispensable una correcta información; pero eso si todo dentro de un marco equilibrado en el que se deslinde toda actuación administrativa que en su momento podría llegar a lesionar derechos como el de la intimidad.

Por lo que dentro de un marco jurídico frecuentemente cambiante como el nuestro, debería existir una importante delimitación entre el poder tributario que el estado posee y las garantías del contribuyente, conminando con esto al ciudadano que su aportación al estado sea más equitativa y racional.

Ya en materia tributaria, el derecho constitucional a la intimidad aparece como excepción o límite importante, al tan comentado derecho, propio de los estados democráticos como es el de la información.

La gran mayoría de la doctrina en particular la europea y en especial la doctrina española, como forma de amparar el derecho a la intimidad personal y económica y tomándole como base fundamental a mencionado derecho, utiliza la tan afamada expresión de “**secreto tributario**”, con el objeto de definir el marco de protección del derecho a la intimidad del contribuyente, sobre la información que la administración tributaria adquiere de Él.

Es decir que el **secreto tributario**, según la doctrina española, no tiene sustento constitucional autónomo sino como ya mencionamos depende básicamente de otros derechos y bienes como el derecho constitucional a la intimidad.

Una vez entendido el papel importante de la figura del secreto tributario, la doctrina nos enseña las consecuencias jurídicas del mismo.

“Básicamente, el secreto tributario, entraña dos consecuencias jurídicas; por un lado, supone la consagración de la reserva o confidencialidad de toda información obtenida por la administración tributaria, de forma que no puede ser revelada a terceros; por otro lado, el secreto impide que la información



UNIVERSIDAD DE CUENCA

en poder de la administración tributaria pueda ser usada para fines diferentes de los estrictamente tributarios”.⁶³

La confidencialidad así como el que la información sea estrictamente tributaria, según la doctrina puede darse de forma directa como indirecta.

La protección directa tiene lugar cuando una ley establece el secreto (reserva o confidencialidad) y los límites del uso de la información fiscal. La protección indirecta, por el contrario, garantiza la reserva de la información fiscal estableciendo sanciones disciplinarias de carácter administrativo y/o penales en el caso de que las personas al servicio de la administración tributaria infringieran su deber de sigilo en relación con los datos de los que tuvieran noticia en el ejercicio de sus funciones.⁶⁴

Como podemos notar de manera clara, en nuestro país la protección directa e indirecta en lo que concierne a la administración tributaria, es inexistente, ya que como bien sabemos el Ecuador no cuenta con una ley específica para el respaldo y protección de datos tributarios.

En la legislación española sucede todo lo contrario ya que gracias a la “Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria”, se puede encontrar las dos formas de protección (directa e indirecta).

Artículo 113.- N.-1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:

- a) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio público.
- b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.

⁶³ José Manuel, Calderón. “El derecho de los contribuyentes al secreto tributario”. Internet. <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/11858/9788497454476.pdf;jsessionid=2043EFD4CED61960E37E2CEB3A6408E?sequence=2>. Acceso: 08 de marzo de 2017.

⁶⁴ Ibídem.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

c) La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social para correcto desarrollo de los fines recaudatorios encomendados a la misma.

d) La colaboración con cualesquiera otras Administraciones públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea.

e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido.

2. Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieren corresponder, la infracción de este particular deber de sigilo se considerara siempre falta disciplinaria muy grave.

Dicho de esta manera el secreto tributario, puede tutelar tanto intereses públicos como particulares.

“Así, desde una primera perspectiva, el fundamento de la citada institución podría hallarse en la protección de los intereses del sujeto que suministra la información, entendiéndose como correlato de los amplios deberes de colaboración y de suministro de información que recaen sobre los obligados tributarios; este último podría exigir que la información suministrada a la administración tributaria fuera utilizada únicamente para la determinación de la deuda tributaria, excluyendo que pudiera ser comunicada a otros órganos de la administración o a particulares. Desde un segundo ángulo, existe un interés público en el secreto tributario, por cuanto que los sistemas tributarios modernos se apoyan en buena medida en la colaboración y suministro voluntario de información por parte de los obligados tributarios. De suerte que éstos estarían tanto más dispuestos a manifestar sus circunstancias cuantas más garantías tengan de que la administración tributaria sólo empleará los datos obtenidos para fines fiscales”.⁶⁵

Es decir que el derecho a la intimidad personal y económica, amparado de forma correcta, no solo beneficia al contribuyente en particular, sino que uno de los beneficiados principales sería el Estado, ya que el fisco al proporcionar

⁶⁵ José Manuel, Calderón. “El derecho de los contribuyentes al secreto tributario”. Internet. <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/11858/9788497454476.pdf;jsessionid=2043EFD4CED61960E37E2CEB3A6408E?sequence=2>. Acceso: 10 de marzo de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

confianza al ciudadano, al no revelar su información, tendría la administración tributaria una mayor facilidad incluso para adquirir datos que quizá de ninguna otra forma no llegarían a su poder, dando como resultado final una mayor y por tanto eficaz recaudación de los tributos.

Afirmando estos argumentos aunque de forma un poco más proteccionista a favor del derecho a la intimidad, pero llegando a la misma conclusión.

El profesor ESCRIBANO ha observado cómo el deber de contribuir requiere en algunos casos una quiebra o flexibilización del derecho a la intimidad, de forma que tal quiebra necesita de un correlativo reflejo que consistirá en la especial protección que proporcionará el ordenamiento a los datos que se ha accedido en virtud de la misma. Lo que podríamos denominar la funcionalidad de la quiebra del derecho a la intimidad impide que de sus resultados puedan obtenerse otros frutos que los estrictamente relacionados con el objeto que justifica y fundamenta el citado cercenamiento del derecho. La prevalencia del deber de contribuir frente al ámbito de lo protegido por el derecho a la intimidad justificará que el uso de lo conocido mediante este procedimiento quede absolutamente reservado a ese fin.⁶⁶

Tal y como lo menciona el autor anterior, se da una flexibilización del derecho a la intimidad, pero eso sí, únicamente a favor de la administración tributaria y con el fin absoluto del principio contributivo al presupuesto del Estado. De ahí surge la dominante necesidad que la administración tributaria tiene para acceder a la información íntima de sus contribuyentes.

Con esto queda claro que no existen derechos ilimitados, y se demuestra que los límites están justificados por la necesidad de proteger también constitucionalmente otros derechos y bienes, que en el caso del derecho tributario se encuentra representado por las aportaciones que el Estado debe recaudar para el respectivo desarrollo público.

⁶⁶ José Manuel, Calderón. "El derecho de los contribuyentes al secreto tributario". Internet. <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/11858/9788497454476.pdf;jsessionid=2043EFD4CED61960E37E2CEB3A6408E?sequence=2>. Acceso: 11 de marzo de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Dicho de otra manera el interés general de contribuir con el estado se presupone al interés particular de la intimidad, pero es aquí en donde está el eje principal del asunto, ya que los datos íntimos del contribuyente que de una u otra forma se flexibilizaron a favor del fisco, deberían permanecer en absoluta reserva, mas no ser divulgados a ninguno, provocando con esto alguna lesión a sus contribuyentes.

A manera de conclusión se podría decir que el derecho a la intimidad representado en la figura jurídica del secreto tributario, se torna importante y necesaria, debido a que su divulgación podría en su momento acarrear graves e irreversibles perjuicios económicos y sociales, en el desarrollo de su actividad no solo personal sino también comercial.

Importancia del derecho a la información.

Ahora bien, analizaremos la importancia del deber de información que deben realizar los ciudadanos, dentro del ámbito de la relación jurídico tributaria, necesario para una más, ágil y justa aplicación de los tributos.

En tiempos actuales, la vieja tesis de que el contribuyente es un simple sujeto “pasivo”, ha quedado olvidada en el pasado; ya que este, además de contribuir con las respectivas cuotas tributarias que por ley le corresponde, tiene que cumplir con un extenso conjunto de deberes y obligaciones, teniendo como principal deber el de colaborar con los datos e informaciones de relevancia tributaria, facilitando con aquello a una correcta recaudación, y por ende un efectivo cumplimiento del deber constitucional de contribuir.

Es decir que es de suma importancia, para la administración tributaria, la obtención de información, tomándola a esta como una herramienta necesaria para el goce de una Administración tributaria eficaz, a sabiendas quizá de que aquello en un momento dado se torne incómodo y molesto.

Y como ya mencionamos en líneas anteriores el derecho a la información no es simplemente necesaria, atreviéndonos con esto a decir que es quizás el elemento más importante que tiene la Administradora de tributos.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Esto lo afirmamos, ya que podemos contar, con materiales necesarios, funcionarios bien preparados e incluso con una buena infraestructura. Pero sin una adecuada información, la administración tributaria carecería de eficacia recaudatoria.

Es tan importante el derecho a la información de la administración tributaria, al punto que a más de la aportación de datos que el contribuyente debe realizar; en la actualidad de manera progresiva, encontramos que individuos ajenos a la relación jurídico tributaria, pero que poseen información con trascendencia tributaria de terceros, están legalmente facultados a proporcionar dicha información, eso sí con las respectivas excepciones.

Y según Osvaldo Soler con esto lo que busca la administración tributaria es: “adquirir el conocimiento sobre la verdad material del hecho investigado, entendido este como uno de los principios liminares en la actuación del organismo fiscal. Verdad material que posibilita que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos con ajuste a la verdadera capacidad contributiva, identificada esta última con los principios de igualdad y justicia de rango constitucional y que informan el ordenamiento tributario. A lo que se añade la necesidad de salvaguardar el interés colectivo a través de la imposición de deberes de información tributaria.”⁶⁷

Nuestra legislación no se podía quedar atrás, y el código tributario en su artículo 98 lo demuestra.

Art. 98.- Deberes de terceros.- Siempre que la autoridad competente de la respectiva administración tributaria lo ordene, cualquier persona natural, por sí o como representante de una persona jurídica, o de ente económico sin personalidad jurídica, en los términos de los artículos 24 y 27 de este Código, estará obligada a comparecer como testigo, a proporcionar informes o exhibir documentos que existieran en su poder, para la determinación de la obligación tributaria de otro sujeto.

⁶⁷ Soler, Osvaldo. “Reflexiones acerca del derecho tributario y la necesidad de velar por la aplicación plena de los principios constitucionales. Análisis de algunas cuestiones relevantes”. Internet. http://www.soler.com.ar/2010/reflex_der_trib.pdf. Acceso: 13 de marzo de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

No podrá requerirse la información a la que se refiere el inciso anterior, a los ministros del culto, en asuntos relativos a su ministerio; a los profesionales, en cuanto tengan derecho a invocar el secreto profesional; al cónyuge, o conviviente con derecho, y a los parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad.

Demostrada la importancia del derecho a la información en el ámbito tributario, queremos señalar que la obligación de contribuir con datos e información, su contenido debe ser estrictamente con **trascendencia tributaria**.

Tal y como lo menciona Juan Manuel Herrero de Egaña:

“La Ley obliga a todas las personas físicas, jurídicas, públicas y privadas a facilitar a la Administración tributaria información propia y de terceros siempre que tenga trascendencia tributaria”.⁶⁸

Tomándole de esta forma, la administración tributaria no puede requerir o almacenar cualquier información, que en su momento podría llegar a lesionar gravemente a la intimidad del contribuyente, sino únicamente información con trascendencia tributaria.

Es decir la Administración tributaria indudablemente necesita información, pero esa información, encuentra su límite en derechos fundamentales como el de la intimidad de los ciudadanos.

⁶⁸ Herrero de Egaña, Juan Manuel. “Intimidad, tributos y protección de datos personales”. Internet. file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/78573-102903-1-PB.pdf. Acceso: 13 de febrero de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

CONCLUSIONES

Luego de haber concluido el respectivo trabajo de investigación, claramente entendemos lo importante que resulta para la Administración tributaria, el contar con el amparo del derecho a la información, como el medio idóneo que faculta a la obtención de datos de sus contribuyentes, convirtiendo con ello a la administradora de tributos en una entidad rápida y eficaz en la cobranza tributaria. Así como también de la importancia trascendental que encierra para los contribuyentes el contar con un derecho que de alguna forma brinde plena seguridad de que sus datos personales y familiares se encuentren en buen recaudo.

Tomando en cuenta de lo fundamental que llegan a ser dichos derechos para cada una de las partes, es necesario concluir diciendo que ni el derecho a la intimidad es más relevante que el de información ni viceversa, ya que en el ámbito respectivo de su aplicación los dos son importantes para el cumplimiento de sus objetivos, con la salvedad de que en cualquier momento, según las circunstancias y por el hecho de vivir en sociedad, tiene que existir desistimiento, unas veces del derecho a la información y otras del derecho a la intimidad.

Por consiguiente más que un versus, entre estos dos derechos debe existir una relación conciliadora, en el que los contribuyentes y la administración tributaria pongan su mayor esfuerzo, predominando así el verdadero interés de vivir en sociedad.

“La civilización no dura porque a los hombres sólo les interesan los resultados de la misma: los anestésicos, los automóviles, la radio. Pero nada de lo que da la civilización es el fruto natural de un árbol endémico. Todo es resultado de un esfuerzo. Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde”.

José ORTEGA Y GASSET



UNIVERSIDAD DE CUENCA

RECOMENDACIONES

Al existir más de 100 países que cuentan con legislación para la protección de datos personales, nosotros pensamos que ya es urgente y necesario que nuestra Asamblea Nacional cree una ley especializada en la protección de los derechos a la intimidad y privacidad de los ciudadanos en general y por ende de los contribuyentes.

Personalmente creemos que no es el hecho de que la ley de protección a la intimidad sea creada con el fin de restar o no proporcionar a la administración tributaria la información que ella requiere, sino más bien con la humildad correspondiente, sugerimos al igual que la doctrina española; que la ley nazca con el único fin de mantener en absoluta confidencialidad todos los datos e informaciones proporcionados a la administración tributaria, de forma que exista un estricto control de la información manejada por la administradora de tributos, evitando con esto su divulgación o uso diferente a los estrictamente tributarios. Con lo cual esquivaremos un sinnúmero de inconvenientes y malos ratos, en procesos administrativos pero sobre todo judiciales.

Pero en caso de conflicto, opinamos que la manera más óptima y viable para resolver el inconveniente, sería la ponderación de derechos, pero eso si tomándolo no como el triunfo o prevalencia de un derecho sobre otro, sino como el momento de cederse uno en favor del otro, según el caso en el que se encuentren.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

BIBLIOGRAFÍA

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 23ª edición, Madrid, 2014.

DESANTES, José María, exposición en seminario, "El derecho a la intimidad y a la vida privada y los medios de comunicación social", 1991, Chile.

EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Argentina, Ed. Depalma, 1993, p. 567.

QUIROGA LAVIE, Humberto; Los derechos humanos y su defensa ante la justicia, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Ed; Temis S.A, 1995.

Fallo de la Corte Constitucional Colombiana, sentencia c-540 de 12 de julio de 2012.

Fallo de la Corte Constitucional Colombiana, sentencia T-522/ de 30 de octubre de 1997.

Constitución Española Ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Vigente desde el 14 de Enero de 2000.

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Actualizada a la reforma de Diciembre de 1994.

LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Promulgada
Parcialmente: Octubre 30 de 2000.

Código civil y de comercio argentino Vigente desde el 1 de agosto de 2015.

Constitución política de México Actualizada a la reforma del 24 de febrero de 2017.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN
DE LOS PARTICULARES, (LFPDPPP). Publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de julio de 2010

Código civil federal Mexicano Actualizada a la reforma de 28 de enero de 2010.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Constitución de la república del Paraguay Promulgada el 20 de junio de 1992.

LEY N. ° 1682, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE 28 DE DICIEMBRE DE 2000. Modificada por la Ley n. ° 1969, el 2 de setiembre de 2002.

Código penal Paraguayo Actualizada, al 03 de octubre de 2011, por la Ley nº 4439/2011.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ratificada el 25 de Enero de 2009 mediante Referéndum popular.

Código penal Boliviano.

Código civil Boliviano.

Gómez, Perla, exposición sobre, “Conceptos básicos del derecho de información”, Internet. <http://alianzaregional.net>. Acceso: 22 de diciembre de 2016.

LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. Publicada el 10 de agosto de 2013

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Publicada el 29 de septiembre de 2016.

Ley general de transparencia y acceso a la información pública. Publicada el 04 de mayo de 2015.

LEY DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Publicada el 06 de julio de 2015

DECRETO SUPREMO N° 28168 Del 17 de mayo de 2005.

LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Publicada el 18 de mayo de 2004.

Rodolfo Spisso, Derecho Constitucional Tributario, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1991, p. 1.

TIBERIO TORRES RODAS, La protección de la intimidad en el derecho tributario, Quito Ecuador Ed. Abya-Yala, 2007, págs. 16 y 17.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Héctor Villegas. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y tributario, séptima edición. Buenos Aires. Ediciones Depalma, 1999, pg.185

Catalina García. Derecho Tributario, Consideraciones Económicas y Jurídicas. Buenos Aires. Ediciones Depalma, 1996, pg. 219

López Carballo, Daniel, Habeas Data, Constitución y Jurisprudencia en el Ecuador, <http://oiprodat.com/2012/01/24/habeas-data-en-ecuador/>, 10 de Enero de 2017

Guillermo Cabanellas. Diccionario Jurídico Elemental. Decimonovena edición. Viamonte. Editorial Heliasta, 2008.

Jurisprudencia colombiana establecida en el artículo cinco de la ley estatutaria 1581.

Oswaldo Soler, Derechos y defensas del contribuyente frente al fisco, Buenos Aires, La Ley, Fondo Editorial de Derecho y Economía, FEDYE, 2001, p. 112.

Alvear, Carlos. “Régimen procesal del hábeas data en el Ecuador”, Internet, <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/24-regimen-procesal-del-habeas.pdf>. Acceso 18 de febrero de 2017.

La trascendencia tributaria en la obtención de información por parte de la Administración Tributaria”. Internet. <http://www.lexland.es>. Acceso: 21 de febrero de 2017.

Herrero de Egaña, Juan Manuel. “Intimidad, tributos y protección de datos personales”. Internet. <file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/78573-102903-1-PB.pdf>. Acceso:21 de febrero de 2017.

Código tributario Ecuatoriano Actualizado a la última reforma del 22 de mayo de 2016.

Bautista, “Félix. La expresión y la intimidad”. Internet.<http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2012/05/02/230920/la-expresion-y-la-intimidad>. Acceso: 25 de febrero de 2017.

Revista Jurídica Cajamarca, “Conflicto jurídico entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información”. Internet. <http://www.derechoycambiosocial.com>. Acceso: 27 de febrero de 2017.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Zabala de González Matilde. Derecho a la intimidad. Buenos Aires, Argentina, Editorial Abeledo- Perrot S.A, 1982, pags, 25 y 26.

López, Sergio, “El derecho a la información como derecho fundamental”. Internet. <https://archivos.juridicas.unam.mx>. Acceso: 28 de febrero de 2017.

Ponderación constitucional”. Internet.
<https://edwinfigueroa.wordpress.com/2010/08/31/ponderacion-constitucional/>. Acceso: 01 de marzo de 2017

Delpiazzo, Carlos. “A la búsqueda del equilibrio entre privacidad y acceso. Internet. <http://docplayer.es/7112746-A-la-busqueda-del-equilibrio-entre-privacidad-y-acceso.html>. Acceso: 01 de marzo de 2017.

“Tribunal Constitucional de España”. Internet.
<http://hj.tribunalconstitucional.es/eu/Resolucion/Show/44>. Acceso: 02 de marzo de 2017.

“Wikipedia”. Internet. https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_acceso_a_la_informaci%C3%B3n. Acceso: 02 de marzo de 2017.

José Manuel, Calderón. “El derecho de los contribuyentes al secreto tributario”. Internet.
<http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/11858/9788497454476.pdf;jsessionid=2043EFFD4CED61960E37E2CEB3A6408E?sequence=2>. Acceso: 08 de marzo de 2017.

Soler, Osvaldo. “Reflexiones acerca del derecho tributario y la necesidad de velar por la aplicación plena de los principios constitucionales. Análisis de algunas cuestiones relevantes”. Internet.
http://www.soler.com.ar/2010/reflex_der_trib.pdf. Acceso: 13 de marzo de 2017.